

EL DERECHO AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 2-48)

—

EL DRET AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 49-92)

LUCÍA CASADO CASADO

Profesora titular de Derecho Administrativo / Professora titular de Dret Administratiu

Universitat Rovira i Virgili

—

Investigadora

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

Sumario. 1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña. 1.1. La nueva Ley de Evaluación Ambiental. 1.2. La reordenación de las competencias ambientales de los entes locales tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. A. Las competencias de los municipios. B. Las competencias de las provincias. C. La excepcionalidad del régimen de licencia en el ámbito local: la protección del medio ambiente como excepción. 1.3. Algunas leyes no ambientales de interés desde el punto de vista ambiental. A. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: su impacto sobre el acceso a la información ambiental. B. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado: la protección del medio ambiente como excepción que justifica la exigencia de autorización. 1.4. Novedades en materia nuclear. 1.5. Novedades en materia de cambio climático. 1.6. Avances en materia de planificación hidrológica: la aprobación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 1.7. Novedades en materia de protección de animales. 1.8. Otras normas de interés. 1.9. El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 2. Derecho y políticas ambientales autonómicas. 2.1. La Ley 1/2014, de 27 de enero, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2014 y su impacto sobre el Canon del Agua. 2.2. El impacto de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público, sobre la legislación ambiental: modificaciones legislativas en materia de ordenación ambiental y de aguas y de agricultura, pesca, alimentación y medio natural. A. La modificación de la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales. B. La modificación de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno. C. La modificación de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades. D. La modificación de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de Promoción de la Actividad Económica, en relación con la prevención y el control ambiental de las actividades ganaderas. E. La modificación del Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, mediante el cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos. F. La modificación del Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, mediante el cual se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña. G. La modificación de la legislación en materia forestal. H. La nueva regulación de la producción agroalimentaria ecológica y de la producción integrada. I. La modificación de la Ley 2/2010, de 18 de febrero, de Pesca y Acción Marítimas, y la Ley 22/2009, de 23 de diciembre, de Ordenación Sostenible de la Pesca en Aguas Continentales. 2.3. El impacto de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público, sobre la legislación urbanística: la prohibición indirecta del *fracking*. 2.4. Otras normas de interés. 2.5. La aplicación de la Directiva de Emisiones Industriales en Cataluña. A. La revisión de las autorizaciones ambientales vigentes. B. La aprobación del Plan y del Programa de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña. 2.6. Algunas actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. A. La Estrategia para Promover el Aprovechamiento Energético de la Biomasa Forestal y Agrícola. B. La Estrategia Catalana para la Renovación Energética de Edificios. C. El establecimiento de una moratoria para determinadas infraestructuras de gestión de residuos. D. La aprobación de algunos planes de acción en materia de contaminación acústica.

1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña

Durante el período objeto de análisis (del 1 de noviembre de 2013 al 31 de marzo de 2014) ha proseguido a nivel estatal la oleada de reformas legislativas en materia ambiental. A la aprobación de la reforma de la Ley de Costas y de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobadas durante el primer semestre de 2013, ha seguido ahora la aprobación, a finales de 2013, de la nueva Ley de Evaluación Ambiental, que unifica en un único texto normativo la regulación de la evaluación ambiental de planes y programas y la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Sin duda, es la norma más destacable en este período en materia de protección del medio ambiente.

Como viene siendo habitual, también se han aprobado en estos meses varias normas reglamentarias en ámbitos sectoriales diversos (energía nuclear, animales, cambio climático...), en algunos casos para cumplir exigencias derivadas del derecho de la Unión Europea; y se ha continuado avanzando en la elaboración de los nuevos planes hidrológicos, con la aprobación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

También se ha puesto de manifiesto en este período la conflictividad competencial entre Estado y comunidades autónomas. Buena prueba de ello son los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el presidente del Gobierno contra la Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional¹; por el Gobierno de Cataluña contra determinados preceptos, en cuanto a la redacción dada a los apartados 7 y 8 del artículo 9 de la Ley del Suelo, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y disposición final decimoctava de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas²; y por la Junta de Extremadura contra determinados preceptos del Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sistema financiero³. Asimismo, se han planteado algunas cuestiones de inconstitucionalidad⁴ y algunos conflictos positivos de competencia⁵.

¹ Admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de febrero de 2014. BOE, núm. 40, de 15 de febrero de 2014.

² Admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de noviembre de 2013. BOE, núm. 273, de 14 de noviembre de 2013. Vid. sobre esta ley el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 9/2013, de 8 de agosto, emitido a solicitud del Gobierno de la Generalitat.

³ Admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de noviembre de 2013. BOE, núm. 286, de 29 de noviembre de 2013.

⁴ Vid. las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 14 de la Constitución (BOE, núm. 55, de 5 de marzo de 2014); y la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la disposición adicional decimocuarta del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en la redacción dada por la Ley Canaria 7/2009, de 6 de mayo, sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, por posible vulneración de los artículos 149.1.1, 8 y 23 en relación con el artículo 132 de la CE (BOE, núm. 55, de 5 de marzo de 2014).

⁵ Vid. los conflictos positivos de competencia promovidos por el Gobierno de Cataluña contra determinados preceptos del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de

En cuanto a los proyectos de ley en trámite, en este período han iniciado su tramitación parlamentaria dos proyectos de ley de interés en materia ambiental: el Proyecto de Ley de Parques Nacionales⁶ y el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental⁷. Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prosigue con la elaboración del Reglamento de la Ley de Costas, que fue presentado al Consejo Asesor de Medio Ambiente y también abierto a consulta pública el pasado mes de marzo.

Por último, también debe destacarse la aprobación del Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013. Asimismo, se ha anunciado desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el impulso de un nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, que se abrirá a consulta pública próximamente.

1.1. La nueva Ley de Evaluación Ambiental

El pasado 11 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental⁸. Se trata de una ley que integra en un único texto normativo la legislación de evaluación ambiental estratégica y de evaluación ambiental de proyectos y que supone la derogación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero; y del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) núm. 761/2001 y las decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión (BOE, núm. 262, de 1 de noviembre de 2013); y contra determinados preceptos del Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del “Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol” para la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo de carbono para una economía sostenible (BOE, núm. 17, de 20 de enero de 2014). En relación con este último, vid. el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 18/2013, de 21 de noviembre, emitido a solicitud del Gobierno de la Generalitat.

⁶ *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, Congreso de los Diputados, X Legislatura, Serie A, núm. 78-1, de 31 de enero de 2014.

⁷ *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, Congreso de los Diputados, X Legislatura, Serie A, núm. 77-1, de 31 de enero de 2014.

⁸ Sobre esta ley, resulta de interés el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 6/2014, de 14 de febrero, emitido a solicitud del Gobierno de la Generalitat.

Esta ley constituye la materialización de otra de las medidas reformistas de la legislación ambiental anunciadas por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a principios de la presente legislatura, que se une a otras recientemente aprobadas (como la reforma de la Ley de Costas o de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación). El objetivo de la reforma, además de aunar en un único cuerpo legal el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y proyectos, es simplificar y racionalizar los procedimientos de evaluación, dotándolos de mayor agilidad, con el fin de que constituyan un instrumento eficaz para la protección del medio ambiente. También pretende establecer un marco jurídico común para la evaluación ambiental y lograr la concertación de la normativa sobre evaluación ambiental en todo el territorio nacional. Ahora bien, no puede ocultarse la motivación económica que justifica su aprobación, motivación que, por otro lado, acompaña a muchas de las recientes reformas normativas en materia ambiental, tanto de ámbito estatal como autonómico, que, más allá de lo ambiental, también se justifican como medidas para paliar la crisis. El propio Ministerio ha afirmado que con esta norma, además de un nuevo impulso al desarrollo sostenible, se prevé generar unos 80.000 empleos y supondrá un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros aproximadamente.

Esta ley también se aprueba, como pone de manifiesto su exposición de motivos, “en sintonía con los principios que animan la revisión de la normativa comunitaria sobre la evaluación ambiental de proyectos”. En efecto, en la Unión Europea está en proceso de revisión la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, siendo inminente la aprobación de una directiva que modificará algunos de sus preceptos. A finales de 2012 vio la luz la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE [COM (2012) 628 final, Bruselas, 26 de octubre de 2012], cuyo objetivo es “adaptar las disposiciones de la Directiva EIA codificada a fin de colmar lagunas, reflejar los cambios y retos ambientales y socioeconómicos actuales y atenerse a los principios de una normativa inteligente”. Se trata, en definitiva, de mejorar la calidad del proceso de evaluación ambiental, simplificar y racionalizar las diferentes etapas del procedimiento y aumentar la cohesión y las sinergias con otras legislaciones y políticas. Llama la atención, sin embargo, que, a diferencia de lo que viene siendo habitual, en esta ocasión la aprobación de la Ley de

Evaluación Ambiental se ha producido sin haberse aprobado todavía la nueva Directiva europea, lo que obligará en un futuro próximo a realizar algunos ajustes.

La Ley de Evaluación Ambiental, incluidos sus anexos, se dicta al amparo del artículo 149.1º.23 CE y, salvo algunas excepciones determinadas por la disposición final octava, tiene el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

En principio, esto ya es así en la actual normativa reguladora de la evaluación ambiental estratégica y de la evaluación de impacto ambiental. La novedad radica ahora tanto en el mayor grado de detalle de la legislación básica estatal a la hora de regular determinadas cuestiones —por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental de proyectos— como en la clara voluntad subyacente de homogeneizar la normativa en esta materia en todo el territorio nacional, armonizar los procedimientos administrativos autonómicos actualmente en vigor y evitar diferencias injustificadas en los niveles de exigencia medioambiental de las comunidades autónomas. Si hasta ahora las diferencias entre las regulaciones autonómicas de la evaluación ambiental han sido grandes, la pretensión —y así se hace constar en la exposición de motivos, que incluso apela a la necesidad de una coordinación vertical efectiva entre los diferentes niveles de gobierno— es que en el futuro haya un marco jurídico común y una legislación homogénea en todo el territorio nacional, con las especificidades estrictamente necesarias en cada comunidad autónoma, para evitar así procesos de deslocalización.

En este contexto cabe situar los principios recogidos en la Ley de “racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación ambiental” y de “cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas” y el papel encomendado a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. A ella corresponderá analizar y proponer las modificaciones normativas necesarias para cumplir los principios recogidos en esta norma y establecer un procedimiento de evaluación ambiental homogéneo en todo el territorio nacional. Por lo tanto, el margen de actuación de las comunidades autónomas para regular esta materia va a ser menor.

Por otro lado, respecto de las comunidades autónomas que tengan legislación propia de evaluación ambiental, la Ley incorpora un novedoso sistema de entrada en vigor. Con arreglo a la disposición derogatoria, la derogación de la actual legislación básica estatal

se producirá, en todo caso, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley. No obstante, si antes de que concluya este plazo las comunidades autónomas aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta ley, la derogación se producirá en el momento en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor.

La Ley de Evaluación Ambiental se estructura en tres títulos (I, “Principios y disposiciones generales”; II, “Evaluación ambiental”; y III, “Seguimiento y régimen sancionador”), integrados por 64 artículos; 15 disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y 10 disposiciones finales; y seis anexos (dedicados respectivamente a los proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria, los proyectos sometidos a evaluación ambiental simplificada, los criterios para determinar si un proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, el contenido del estudio ambiental estratégico, los criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria y el estudio de impacto ambiental y criterios técnicos).

Su finalidad principal es establecer “las bases que debe regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible”. Asimismo, recoge los principios que informarán el procedimiento de evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y el régimen de cooperación entre la Administración estatal y las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente (art. 1).

En relación con su contenido, lo más destacable es, por una parte, como ya hemos avanzado, la regulación en el mismo texto normativo de la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental de proyectos; y, por otra, la introducción de importantes novedades procedimentales destinadas a lograr una mayor simplificación y agilización de la tramitación de los procedimientos de evaluación, sin olvidar la incorporación de nuevas tipologías de proyectos (por ejemplo, los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o *fracking*).

La Ley de Evaluación Ambiental incorpora algunas novedades importantes. Dado el objeto de esta crónica, no pretende realizarse un análisis detallado de la Ley, sino

únicamente destacar algunos aspectos de su contenido. En primer lugar, la Ley regula de forma exhaustiva los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental de proyectos, estableciendo un esquema similar para ambos procedimientos y unificando la terminología utilizada. Como novedad, se diseñan para ambos tipos de evaluación dos procedimientos (el ordinario y el simplificado). Existirán, en consecuencia, procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada; y procedimientos de evaluación de impacto ambiental ordinaria y simplificada. Se pretende de esta forma simplificar los procedimientos y agilizar el proceso de evaluación para determinados planes, programas y proyectos.

En segundo lugar, entre las novedades más significativas, la Ley establece plazos máximos para los procedimientos, lo que conlleva una reducción considerable de la duración de los procedimientos. En todo caso, habrá que ver si realmente estos plazos son de factible cumplimiento en la práctica y si no repercutirán negativamente en la calidad y en la rigurosidad de los procedimientos y pronunciamientos ambientales que se emitan. Asimismo, son muchos los cambios que se introducen en determinados trámites del procedimiento (por citar solo algunos ejemplos, la inclusión tanto en la evaluación ambiental estratégica como en la evaluación de impacto ambiental de un trámite de inadmisión de carácter sustantivo, con la finalidad de que los promotores conozcan en fases preliminares del procedimiento que existen fundadas razones para entender que el plan, programa o proyecto no podrá contar con un pronunciamiento ambiental favorable; la configuración con carácter potestativo del trámite previo para determinar el alcance del estudio de impacto ambiental; o la extensión del trámite de consulta para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental no solo a las administraciones públicas afectadas, sino también a las personas interesadas).

En tercer lugar, la Ley, recogiendo la jurisprudencia, define por vez primera la naturaleza jurídica de la “evaluación ambiental” y la califica como “procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos

significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos” (art. 5.1.a).

Asimismo, determina que la naturaleza jurídica de la declaración ambiental estratégica, el informe ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental corresponde a la de informe preceptivo y determinante; y clarifica que contra estos pronunciamientos ambientales no procederá recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien de los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan o programa o de autorización del proyecto. De esta forma, se recoge en la norma una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo que impedía la impugnación directa de la declaración de impacto ambiental. Debe valorarse positivamente que, en cambio, se permita la interposición de los recursos que procedan en vía administrativa o judicial contra la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental en aquellos casos en que los proyectos sujetos a evaluación no requieran una autorización sino una comunicación previa o una declaración responsable. En estos supuestos sí debe admitirse la impugnabilidad de estos pronunciamientos ambientales, en la medida en que dejan de ser un mero acto de trámite y ponen fin al procedimiento de evaluación, que se convierte en un procedimiento autónomo y decisorio.

En cuarto lugar, la Ley de Evaluación Ambiental también incluye algunas previsiones en torno a la capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos ambientales. Concretamente, exige que los documentos que presenten los promotores en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental sean realizados por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de educación superior y que tengan la calidad necesaria para cumplir las exigencias de esta norma. Para ello, los estudios y documentos ambientales mencionados deberán identificar a su autor o autores, indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada, y deberán ir firmados por el autor, haciendo constar la fecha de conclusión. Se prevé, además, que los autores de estos documentos serán responsables de su contenido y de la fiabilidad de la información, salvo en lo que se refiere a los datos recibidos de la Administración de forma fehaciente. Con estas previsiones se cubre un vacío en la legislación vigente, dada la necesidad de introducir mayor rigor y de garantizar la calidad de los equipos que

realizan estos estudios y documentos ambientales, si bien la Ley aún podría haber ido más allá en esta materia, como han hecho algunas legislaciones autonómicas.

En quinto lugar, otra de las novedades introducidas que merece una valoración positiva es la introducción de la obligación de tener en consideración el cambio climático en los procedimientos de evaluación ambiental. Por ejemplo, los efectos de los proyectos sobre el cambio climático se incluyen ahora como contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental; y también deberá tenerse en consideración el cambio climático por parte del órgano ambiental cuando realice el análisis técnico del expediente de impacto ambiental, evaluando los efectos ambientales del proyecto.

Por último, otra de las novedades más controvertidas de la Ley es la creación de los bancos de conservación de la naturaleza (disposición adicional octava), que constituyen un instrumento de carácter voluntario que permite compensar, reparar o restaurar la pérdida de valores naturales que se produce como consecuencia de la ejecución de proyectos con impacto ambiental. Los bancos de conservación de la naturaleza son un conjunto de títulos ambientales o créditos de conservación otorgados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, por las comunidades autónomas que representan valores naturales creados o mejorados específicamente. Los titulares de los terrenos afectados por los bancos deberán conservar los valores naturales creados o mejorados, debiendo estos terrenos destinarse a usos que sean compatibles con los valores naturales, de acuerdo con lo que disponga la resolución de creación de cada banco. Los créditos generados en estos bancos se inscribirán en un registro público dependiente del Ministerio y se podrán transmitir en régimen de libre mercado y podrán constituir las medidas compensatorias o complementarias previstas en la legislación de evaluación ambiental, responsabilidad medioambiental o sobre patrimonio natural y biodiversidad. La creación de estos bancos de la naturaleza, cuyo régimen general, organización, funcionamiento y criterios técnicos se remite al desarrollo reglamentario, supone la introducción de un instrumento de mercado en el régimen de evaluación ambiental. Este mecanismo, utilizado en otros países, ha suscitado, sin embargo, la reacción y las críticas de las asociaciones ecologistas.

1.2. La reordenación de las competencias ambientales de los entes locales tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

La aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local —en adelante, LRSAL—, que modifica la LBRL, también debe destacarse en el marco de esta crónica por sus implicaciones sobre las competencias ambientales de las administraciones locales.

Esta ley tiene por objeto acometer una revisión profunda del régimen jurídico aplicable a las entidades locales a través de la modificación de numerosos preceptos y disposiciones —y de la introducción de otros nuevos— de la LBRL y del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Esta reforma, que enlaza directamente con el principio de estabilidad presupuestaria consagrado por el artículo 135 de la CE —en su nueva redacción dada en 2011—, tiene como fin último lograr la racionalización de la Administración local y garantizar su sostenibilidad financiera. La LRSAL se encuentra estrechamente vinculada a las exigencias derivadas del artículo 135 de la CE, que consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas y, por lo tanto, también las locales; y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se revelan como el eje central en torno al cual se estructura la LRSAL, impregnando su contenido e inspirando la casi totalidad de las medidas que en ella se incluyen.

En este contexto, uno de los objetivos básicos de la reforma es la clarificación de las competencias municipales, por lo que la LRSAL procede a su reordenación (y también reducción) a través de la modificación de los artículos 7, 25, 26 y 27 de la LBRL y la supresión del artículo 28, con el fin de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre administraciones hasta ese momento existentes.

A. Las competencias de los municipios

El nuevo modelo de delimitación competencial que establece la LRSAL afecta significativamente a las competencias de los municipios en materia de medio ambiente, que son objeto de redefinición. En primer lugar, en relación con las competencias propias de los municipios, el artículo 25.2 de la LBRL continúa incluyendo entre las competencias propias de los municipios el medio ambiente. Son varias, sin embargo, las novedades que se introducen en este ámbito. Si bien anteriormente se recogía como competencia propia de los municipios la protección del medio ambiente, tras la LRSAL, el artículo 25.2 de la LBRL se refiere ahora, de forma más concreta, al “medio ambiente urbano” [art. 25.2.b)] y pormenoriza los ámbitos de intervención que, en particular, se incluyen en este concepto: parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos (antes “recogida y tratamiento de residuos”) y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Llama la atención la inclusión, dentro del “medio ambiente urbano”, como competencia de carácter más específico, de la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica, que antes no aparecía. También se incluyen entre las materias sobre las que los municipios ejercerán competencias propias el “abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales” (con anterioridad “suministro de agua”) [art. 25.2.c)].

Por otro lado, continúan incluyéndose en la lista de materias del artículo 25.2, aunque con algunos matices en la redacción utilizada —generalmente para introducir mayor precisión—, otras materias directa o indirectamente relacionadas con la protección del medio ambiente y con enormes implicaciones sobre esta [urbanismo —art. 25.2.a)—; protección civil, prevención y extinción de incendios —art. 25.2.f)—; tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad; y protección de la salubridad pública art. 25.2.j)]. Y materias que, si bien en apariencia no son ambientales o guardan a priori poca relación con el medio ambiente, tienen un importante contenido ambiental [es el caso, por ejemplo, del transporte colectivo urbano —art. 25.2.g)— o de la información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local —art. 25.2.h)—].

A pesar del reconocimiento del medio ambiente urbano, del abastecimiento de agua potable a domicilio y de la evacuación y el tratamiento de aguas residuales —y de esas otras materias— como competencia propia de los municipios, la LBRL no atribuye directamente competencias a los municipios, sino que será la legislación sectorial la que habrá de concretar las competencias municipales en estos ámbitos. Así se deriva del

propio artículo 25.2 de la LBRL, que prevé que los municipios ejercerán estas competencias “en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas”. Además, ahora la atribución competencial deberá responder a una evaluación previa de la conveniencia de la implantación de servicios locales de que se trate conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Por lo tanto, las materias del artículo 25 de la LBRL siguen siendo indicativas y la determinación de las competencias de los entes locales continúa siendo una cuestión reservada a la ley sectorial —estatal o autonómica—, si bien ahora también se tendrán en cuenta elementos económicos para determinar las competencias y los servicios públicos a prestar por los municipios. Como novedad, la concreción por ley de las competencias municipales enumeradas en el nuevo artículo 25.2 de la LBRL se somete ahora al cumplimiento de requisitos estrictos. El nuevo apartado 4 del artículo 25 de la LBRL exige, en primer lugar, que la ley vaya acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las administraciones públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. En segundo lugar, que prevea la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales. Y, por último, que la atribución competencial determinada por ley no conlleve, en ningún caso, un mayor gasto de las administraciones públicas. En consecuencia, no solo se exige, como ya sucedía anteriormente, que una ley determine las competencias municipales específicas en las materias enunciadas en el artículo 25.2, sino que, además, ahora es necesaria su valoración económica y la aportación de recursos para las competencias que se reconozcan. En efecto, no será posible el reconocimiento de competencias en una determinada materia si no se garantiza la suficiencia financiera de las entidades locales o si implica un mayor gasto para las administraciones públicas. Finalmente, como último requisito que se impone al legislador, el nuevo apartado 5 del artículo 25 de la LBRL exige que la ley determine la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra administración pública. Se pretende, de esta forma, evitar duplicidades administrativas.

En segundo lugar, en cuanto a los servicios mínimos obligatorios, continúan concretándose en el artículo 26 de la LBRL —también modificado por la LRSAL—, que detalla una serie de servicios que los municipios deben prestar de forma obligatoria.

A diferencia del artículo 25 de la LBRL, que no contiene una habilitación competencial expresa en la medida en que las materias que enumera como competencias propias precisan de ulterior concreción por el legislador estatal o autonómico, el artículo 26 ya realiza una habilitación específica a los municipios para la prestación de determinados servicios en diferentes ámbitos de actuación. Se trata de servicios mínimos obligatorios que deben ser asegurados por todos los municipios —en función del número de habitantes— con independencia de su ubicación y que deben llegar a todos los ciudadanos. Ahora ya no se prevé que estos servicios puedan prestarlos los municipios “por sí o asociados”, habiendo desaparecido este inciso del apartado 1 del artículo 26.

Entre estos servicios mínimos de prestación obligatoria, recogidos en el artículo 26.1 de la LBRL, continúan incluyéndose algunos servicios ambientales. Todos los municipios deben prestar los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. Los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además, el de tratamiento de residuos. Los de más de 20.000 habitantes, además, los de protección civil y prevención y extinción de incendios. Hasta aquí y por lo que hace referencia a los servicios ambientales, no hay novedad alguna en relación con las previsiones ya contenidas en el artículo 26.1 de la LBRL con anterioridad a su reforma por la LRSAL. La novedad en este ámbito radica en la configuración del medio ambiente urbano como servicio obligatorio para los municipios con población superior a 50.000 habitantes. Para estos municipios ya no se configura como servicio municipal de prestación obligatoria el de protección del medio ambiente, sino el de medio ambiente urbano, que es más limitado. No se concreta, sin embargo, qué se incluye dentro de ese servicio de medio ambiente urbano, lo cual hubiera sido deseable.

La novedad más importante que recoge el nuevo artículo 26 de la LBRL en cuanto a la prestación de los servicios municipales obligatorios es la previsión de que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes —más del 95% de los municipios— será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de determinados servicios: recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público. Como puede comprobarse, tres de los seis servicios cuya

coordinación de la prestación se atribuye a las diputaciones provinciales son ambientales. Se trata, además, de servicios obligatorios que generan grandes costes.

En tercer lugar, el abanico competencial de los municipios en materia ambiental debe completarse con las competencias que puedan ejercer en este ámbito por delegación. El artículo 27 de la LBRL también ha sido modificado por la LRSAL y se ha hecho eco de los parámetros de eficiencia y equilibrio financieros de las entidades locales, omnipresentes en la LRSAL. En su nueva redacción, este precepto también prevé, en su apartado primero, que el Estado y las comunidades autónomas —no menciona, sin embargo, a otras entidades locales—, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias.

En la actualidad se prevé específicamente la posibilidad de delegar determinadas competencias ambientales. El nuevo apartado 3 del artículo 27 de la LBRL, con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, habilita a la Administración del Estado y a las de las comunidades autónomas para delegar —no concreta si solo en los municipios o también en otros entes locales—, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las competencias de “vigilancia y control de la contaminación ambiental” [apartado a)], “protección del medio natural” [apartado b)], “inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales” [apartado i)] y “comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos” [apartado k)]. Ello no obsta para que puedan ser objeto de delegación otras competencias ambientales, ya que la enumeración que contiene el artículo 27.3 es meramente ejemplificativa. De todas formas, en algunas de las materias ambientales que se recogen como susceptibles de delegación, los municipios disponen con arreglo a la legislación sectorial autonómica de algunas competencias. Es el caso, por ejemplo, del ámbito de la “vigilancia y control de la contaminación ambiental”. Ello plantea la articulación entre las previsiones de la legislación de régimen local y la legislación sectorial ambiental, cuestión que excede con creces el objeto de esta crónica.

La delegación también se somete ahora a requisitos más estrictos. En primer lugar, habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (art. 25.1 LBRL). No se exige, sin embargo, que alcance una

mayor participación ciudadana como hacía en su redacción anterior el apartado primero del artículo 25 de la LBRL. En segundo lugar, deberá determinar el alcance, el contenido, las condiciones y la duración de esta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos que esta asigne, sin que pueda conllevar un mayor gasto de las administraciones públicas (art. 25.1 LBRL). En tercer lugar, deberá acompañarse de una memoria económica donde se valore el impacto en el gasto de las administraciones públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de estas (art. 25.1. LBRL). En cuarto lugar, habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. Además, en caso de incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante, se faculta a la entidad local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que esta tenga con aquella (art. 27.6 LBRL). Además, se contempla entre las causas de renuncia de la delegación el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante. También constituye causa de renuncia cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas, sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias (art. 27.7 LBRL). En quinto lugar, requerirá siempre, para su efectividad, su aceptación por el municipio interesado, ya que no se contempla, como hacía en su redacción anterior el artículo 27.4 de la LBRL, su imposición obligatoriamente por ley (art. 27.5 LBRL).

En cuarto lugar, la LRSAL limita en gran medida el ejercicio por parte de las entidades locales de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, conocidas habitualmente como “competencias impropias”. Con arreglo al nuevo apartado 4 del artículo 7 de la LBRL, los municipios únicamente podrán ejercer estas competencias cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del servicio público con otra administración pública. A estos efectos, son necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración

competente por razón de la materia, en los que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las comunidades autónomas. Con esta regulación se pretende, tal y como se pone de manifiesto en el preámbulo de la LRSAL, que las entidades locales no vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada. Como correlato de la limitación y excepcionalidad con que se configuran ahora las competencias impropias, la LRSAL también ha suprimido el contenido del artículo 28 de la LBRL, que contenía una cláusula de competencias complementarias. De este modo, se elimina la posibilidad, anteriormente recogida en este precepto, de que los municipios puedan realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. Ello no implica, sin embargo, que los municipios estén obligados a dejar de intervenir en estas materias, sino que su intervención deberá encuadrarse, según los casos, en algunas de las categorías competenciales ya analizadas (competencias propias —es el caso, por ejemplo, de la protección del medio ambiente, ya que el “medio ambiente urbano” se contempla como competencia propia, con el alcance concreto que las leyes determinen en cada caso—, competencias delegadas o competencias impropias).

B. Las competencias de las provincias

La LRSAL procede al reforzamiento de las diputaciones provinciales, tanto en sus tradicionales funciones de cooperación y asistencia como en su nuevo papel como prestadoras de servicios y en las funciones de supervisión y tutela sobre los municipios. Desde la perspectiva ambiental, dos son los aspectos más destacables. Por una parte, la asunción por parte de las diputaciones provinciales de la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes. El artículo 36.1 de la LBRL configura ahora como competencia propia de las diputaciones provinciales —o entidades equivalentes— la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial; y, en particular, la asunción de “la prestación de los servicios de tratamiento de residuos

en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación” [apartado c)].

Por otra, como hemos avanzado, se atribuye a las diputaciones provinciales la coordinación de la prestación de determinados servicios obligatorios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, entre los que se encuentran los de recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales y limpieza viaria. Para coordinar la prestación de estos servicios, el nuevo apartado 2 del artículo 26 de la LBRL prevé que la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. La decisión sobre la forma de prestación de los citados servicios obligatorios corresponde, por lo tanto, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Para reducir los costes de los servicios, decidirá sobre la propuesta formulada, que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. Cuando sea la Diputación —o entidad equivalente— quien asuma la prestación de estos servicios, repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación, será a esta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. El artículo 26.2 de la LBRL también contempla la posibilidad de que los municipios asuman la prestación y coordinación de estos servicios. Para ello, será necesario que justifiquen ante la Diputación que pueden prestar esos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente. Si la Diputación lo considera acreditado, los municipios podrán retener la prestación y coordinación de estos servicios.

Estas previsiones deben completarse con el nuevo artículo 116 ter de la LBRL, introducido por la LRSAL. De conformidad con este precepto, todas las entidades locales deben calcular antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes correspondiente al ejercicio inmediato inferior. El cálculo del

coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta todos los costes reales directos e indirectos de estos, aunque se remite a una orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el desarrollo de estos criterios de cálculo. En cualquier caso, todas las entidades locales deben comunicar a este ministerio, para su publicación, los costes efectivos de cada uno de los servicios. Se trata de una medida de transparencia que el preámbulo de la LRSAL considera “un paso fundamental en la mejora de la información disponible, eliminando asimetrías, para la toma de decisiones de los ciudadanos y de la Administración, y contribuirá de forma permanente al aumento de la eficiencia”. Además, con la publicación de la información de todos los costes efectivos de los servicios prestados por todas las entidades locales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contribuye a garantizar el cumplimiento del principio de eficiencia, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A las diputaciones o entidades equivalentes corresponde el seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes [art. 36.1.h) LBRL].

C. La excepcionalidad del régimen de licencia en el ámbito local: la protección del medio ambiente como excepción

La LRSAL también introduce algunos cambios en relación con la intervención administrativa local que son relevantes desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. Concretamente, modifica el artículo 84 bis de la LBRL, que había sido introducido por la Ley 3/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, con el fin de profundizar en la línea de simplificación administrativa ya adelantada con la transposición de la Directiva de Servicios en el mercado interior y de frenar la utilización de las licencias municipales. En su actual redacción, el artículo 84 bis mantiene la excepcionalidad del régimen de licencia en el ámbito local y solo permite su establecimiento en casos excepcionales en que se acredite su necesidad y proporcionalidad. Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrá exigirse

una licencia u otro medio de control preventivo respecto a las actividades económicas en los dos supuestos siguientes:

- Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. De esta forma, la protección del medio ambiente continúa recogiendo como excepción que permite justificar el mantenimiento de regímenes de licencia. Ahora bien, no basta con que concurran razones de protección ambiental para someter el ejercicio de una actividad a licencia, sino que será necesario, además, que esta sea la medida más adecuada para alcanzar el objetivo pretendido, que no quedaría salvaguardado mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. Resulta necesario, por lo tanto, que la necesidad y la proporcionalidad queden claramente justificadas.

- Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores del mercado sea limitado.

La LRSAL también pretende favorecer la iniciativa económica privada, evitando, con carácter general, que los municipios sometan a autorización municipal las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para iniciar una actividad económica. En efecto, el artículo 84 bis, en su apartado 2, establece que estas instalaciones o infraestructuras solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una ley que defina sus requisitos esenciales y estas sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes: la potencia eléctrica o energética de la instalación, su capacidad o aforo, la contaminación acústica, la composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración, la existencia de materiales inflamables o contaminantes y las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico.

Por otro lado, en caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y otra administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que

se pretende proteger y que este no se encuentra cubierto mediante otra autorización ya existente. De esta forma, se pretende evitar el sometimiento a licencia local de actividades que ya cuenten con la autorización de otras administraciones. En estos casos, para poder mantener la licencia local, el ente local deberá justificar su necesidad y proporcionalidad.

1.3. Algunas leyes no ambientales de interés desde el punto de vista ambiental

Aunque no se trata de leyes cuyo objeto sea la protección del medio ambiente, vamos a referirnos brevemente a algunos aspectos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, de interés en este ámbito.

A. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: su impacto sobre el acceso a la información ambiental

El acceso a la información ambiental cuenta en España con una regulación específica desde el año 1995, ahora recogida en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Recientemente se ha aprobado la primera ley española de transparencia: la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Ello ha supuesto un avance significativo, ya que España era de los pocos países europeos que carecía de una norma de este tipo. Se trata de una iniciativa de gran importancia política y jurídica, dada la necesidad de transparencia de las actuaciones públicas. Su objeto es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas; reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad, regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo; y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y las consecuencias derivadas de su incumplimiento, lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública. Con la aprobación de esta ley se cubre una laguna legal existente en España, ya que, aunque existían normas sectoriales que contienen obligaciones de difusión y de

acceso a la información (por ejemplo, en materia de contratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos) e incluso una ley específica para regular el acceso a la información en materia de medio ambiente, faltaba una regulación general del derecho de acceso y publicidad de la información.

La aprobación de la Ley 19/2013 obliga a plantear cómo afectará al ámbito del acceso a la información ambiental, que ya cuenta con legislación específica desde el año 1995. Esta cuestión se aborda en la disposición adicional primera de la Ley, en cuyo apartado segundo establece que aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información —es el caso del medio ambiente— se regirán por su normativa específica y, con carácter supletorio, por esta ley. Por lo tanto, es de aplicación preferente la Ley 27/2006, de acceso a la información ambiental.

No obstante, en esta misma disposición adicional, en su apartado tercero, se establece que “esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental, a la destinada a la reutilización y a la obrante en los archivos que no tengan la consideración de archivos de oficina o gestión”. De este modo, con arreglo a lo establecido en este apartado tercero, en todo lo no previsto en la legislación de acceso a la información será de aplicación la Ley 19/2013. Y ello plantea algunas cuestiones interesantes de las cuales destacamos especialmente dos. Por una parte, el régimen del silencio administrativo en caso de que transcurra el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa. En relación con esta cuestión, la Ley 27/2006 no contiene referencia alguna al silencio administrativo, por lo que, por aplicación de la regulación general de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta ahora se entendía que se aplicaba la regla general del silencio positivo fijada por su artículo 43.2, en la medida en que no existía una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de derecho comunitario europeo que estableciera lo contrario ni concurrían las excepciones establecidas por este precepto. Sin embargo, ahora la Ley 19/2013, que, recordemos, con arreglo al apartado tercero de la disposición adicional primera “será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental”, prevé un régimen de silencio administrativo negativo (con arreglo a su artículo 20.5, “transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya

dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”).

Por otra, en la medida en que la Ley 19/2013 crea una reclamación específica, sustitutiva de los recursos administrativos, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno —organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado—, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, se plantea si esta reclamación también sería aplicable en el ámbito del acceso a la información ambiental. En nuestra opinión, sí⁹.

B. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado: la protección del medio ambiente como excepción que justifica la exigencia de autorización

En diciembre de 2013 también vio la luz la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, dictada con la finalidad de establecer las disposiciones necesarias para hacer efectiva la unidad de mercado en todo el territorio nacional. Se trata, en definitiva, de una ley cuyo objetivo general es introducir “un marco regulatorio eficiente para las actividades económicas”¹⁰. La Ley se apoya principalmente en el principio de unidad de mercado recogido en el artículo 139 de la CE “para imponer una nueva regulación de las condiciones de acceso a las actividades económicas y a su ejercicio, nueva regulación que pretende corregir la realidad de un mercado excesivamente fragmentado desde el punto de vista normativo”¹¹. Con esta finalidad, introduce una serie de medidas de supresión de barreras administrativas y de armonización normativa¹² que pretenden hacer frente a esta fragmentación del mercado nacional, que, como pone de manifiesto el preámbulo, “dificulta la competencia efectiva e impide aprovechar las economías de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones, lo que desincentiva la

⁹ Así se ha pronunciado también en la doctrina administrativista FERNÁNDEZ RAMOS, S., “El acceso a la información en el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, Bermejo Latre, J. L. y Castel Gayán, S., *Transparencia, participación ciudadana y Administración pública en el siglo XXI*, monografía de la *Revista Aragonesa de Administración Pública*, XIV, Zaragoza, 2013, p. 239.

¹⁰ TORNOS MAS, J., “La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En particular, el principio de eficacia”, *Revista d’Estudis Autònoms i Federals*, núm. 19, 2014, p. 147.

¹¹ TORNOS MAS, “La Ley...” *cit.*, p. 147.

¹² LOZANO CUTANDA, B., “Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado: las diez reformas clave”, Gómez-Acebo&Pomo, *Noticias Breves*, diciembre de 2013, p. 1.

inversión y, en definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el empleo, con el importante coste económico que supone en términos de prosperidad, empleo y bienestar de los ciudadanos”. Entre ellas, destacamos especialmente las siguientes: la ampliación de los supuestos en que no podrán aplicarse controles previos para el acceso a las actividades económicas y su ejercicio; la extensión de la eficacia a todo el territorio nacional de todos los medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias; el fomento de la cooperación interadministrativa; y la introducción de un conjunto de mecanismos de protección de los operadores económicos en el ámbito de la libertad de establecimiento y de la libertad de circulación.

A los efectos que aquí nos interesan, queremos destacar que la protección del medio ambiente se contempla en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado como excepción que permite la exigencia de una autorización. Efectivamente, el artículo 17, bajo el título “Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad”, permite la exigencia de una autorización “siempre que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen”. Se considera que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización, respecto a los operadores económicos, cuando esté justificada, entre otras causas, por razones de protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación; respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación; cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado; y cuando así lo dispongan la normativa de la Unión Europea o tratados y convenios internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de precaución.

Por otro lado, esta ley también refuerza los mecanismos de cooperación y colaboración entre las distintas autoridades competentes mediante el intercambio de información y, en su caso, solicitudes de actuación, para evitar perjuicios graves para la salud o seguridad de las personas o para el medio ambiente y facilitar la adopción de las medidas que resulten necesarias en los plazos más breves posibles (art. 25).

1.4. Novedades en materia nuclear

En materia nuclear, se ha aprobado recientemente el Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Este real decreto, dictado al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13 y 25 de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases del régimen minero y energético, respectivamente, incorpora al derecho español la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, y deroga el Real Decreto 1349/2003, de 31 de octubre, sobre ordenación de las actividades de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. (ENRESA), y su financiación, así como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Constituye el objeto de este real decreto la regulación de la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos cuando procedan de actividades civiles, en todas sus etapas, desde la generación hasta el almacenamiento definitivo, con el fin de evitar imponer a las futuras generaciones cargas indebidas, así como la regulación de algunos aspectos relativos a la financiación de estas actividades, dando cumplimiento al marco comunitario. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto los residuos de las industrias extractivas que puedan tener contenido radiactivo y estén incluidos dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, cuando no sean considerados residuos radiactivos; y las evacuaciones al medio ambiente que hayan sido autorizadas.

Con esta finalidad, contempla algunos principios generales a respetar en la gestión de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y precisa las responsabilidades sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. En particular, el Real Decreto, de conformidad con lo previsto en la Directiva, compatibiliza la atribución de la responsabilidad principal o primera respecto de estos materiales de quien los genera o es titular de la correspondiente autorización con la responsabilidad última que corresponde al Estado y que se concreta, entre otros aspectos, en la calificación —ya explicitada en la Ley 25/1964, de 29 de abril— de la gestión como servicio público esencial reservado al Estado.

Asimismo, se establecen la regulación y el contenido del Plan General de Residuos Radiactivos, así como algunos aspectos relativos a su financiación, y se regulan el Comité de Seguimiento y Control del Fondo para la Financiación de Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos; el objeto y las funciones de ENRESA y el control de sus actuaciones y planes; las especificaciones técnico-administrativas de aceptación; el control de seguridad de la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos; y el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos fuera de España.

Por último, también modifica dos normas reglamentarias. En primer lugar, el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, con el fin de incorporar una nueva autorización de desmantelamiento y cierre para las instalaciones de almacenamiento definitivo de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, e incluir la obligación de aportar garantías proporcionadas que cubran los costes y las contingencias que se pudieran derivar de los procesos de desmantelamiento y clausura o cierre de las instalaciones nucleares. Asimismo, se aclara que la declaración de cese de actividad supone una autorización de explotación en la que se establecen las condiciones a las que han de ajustarse las actividades a realizar en la instalación hasta disponer de la autorización de desmantelamiento, introduciendo la posibilidad de su renovación tras dicho cese cuando este haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica.

Y, en segundo lugar, el Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de traslados de residuos radioactivos y combustible nuclear gastado

entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad, con el objeto de clarificar su redacción.

1.5. Novedades en materia de cambio climático

En materia de cambio climático, deben mencionarse especialmente tres normas reglamentarias, todas ellas dictadas al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13 y 23 de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre legislación básica en materia de protección del medio ambiente. En primer lugar, el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, cuyo objeto es la creación del Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, con el fin de contribuir a reducir a nivel nacional las emisiones de gases de efecto invernadero, a incrementar las absorciones por los sumideros de carbono en el territorio nacional y a facilitar de esta manera el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de cambio climático. El objetivo del Registro es que las empresas calculen y reduzcan su huella de carbono y que la registren voluntariamente. Posteriormente, podrán compensarla a través de proyectos de absorción o sumideros forestales que estén localizados en España, con lo que también se impulsará la creación de masas forestales que absorban el CO₂. A estos efectos, el Registro tiene tres secciones: la primera está dirigida a las empresas que calculen su huella de carbono y que la quieran registrar oficialmente, con lo que obtendrán un sello nacional que lo acredite; la segunda incluye a las empresas y entidades que cuenten con proyectos forestales en España; y la tercera permitirá conectar a las empresas que quieren compensar su huella de carbono con las que tienen los proyectos en territorio nacional, de manera que dicha compensación se haga en España a través de sumideros forestales.

En segundo lugar, dando continuidad al Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Aire y al Plan PIMA Aire 2, que forman parte de una estrategia más amplia, diseñada y puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el objetivo de reducir de forma significativa las emisiones de contaminantes atmosféricos, principalmente partículas, así como las emisiones de CO₂ mediante la renovación del parque actual de vehículos por modelos más eficientes y de menor

impacto ambiental disponibles en el mercado español, se han aprobado el Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 3” para la adquisición de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico; y el Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores agrícolas “PIMA Tierra”. Con estas normas se pretende continuar con la línea trazada por el Gobierno para consolidar los objetivos alcanzados y seguir avanzando en la protección del medio ambiente y, en concreto, en la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos de los vehículos, especialmente significativas en las grandes ciudades. Todo ello mediante la inclusión de una serie de medidas que se enmarcan dentro de las políticas del Gobierno de lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado, mediante Acuerdo de 15 de noviembre de 2013, la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión para el período 2013-2020 y para cada año a cada instalación¹³.

1.6. Avances en materia de planificación hidrológica: la aprobación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro

Aunque con mucho retraso en relación con los plazos fijados por la Directiva Marco del Agua, continúan los avances en materia de planificación hidrológica. En el período examinado se ha publicado en el BOE el Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Con este, ya son 14 los planes hidrológicos aprobados. Este plan ha nacido envuelto en una gran polémica y ha abierto un enfrentamiento entre el Estado y la Generalitat de Catalunya. El punto más conflictivo es el caudal ecológico que cada administración considera como umbral mínimo. Mientras que la Generalitat reclama unos 7.000 hectómetros cúbicos anuales, el Gobierno central impone 3.200.

1.7. Novedades en materia de protección de animales

¹³ BOE, núm. 44, de 20 de febrero de 2014.

Mediante el Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de la matanza. Esta norma tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13 y 149.1.16 de la Constitución, por los que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y en materia de bases y coordinación general de la sanidad. Su objetivo es desarrollar la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, estableciendo disposiciones específicas de aplicación en España del Reglamento (CE) núm. 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, en relación con las cuestiones siguientes: en lo relativo a la formación de las personas que realizan la matanza y las operaciones conexas a ella; en algunos aspectos en lo relativo a la matanza de animales en las explotaciones dedicadas a la producción de animales de peletería y en las que se maten pollitos de hasta 72 horas o huevos embrionados, así como al vaciado sanitario; en los requisitos mínimos para realizar la matanza de emergencia fuera del matadero y para consumo doméstico privado; y en lo relativo a la comercialización en España de productos de equipamiento de sujeción y aturdimiento. Con esta finalidad, recoge disposiciones generales sobre la competencia del personal que realiza el sacrificio o matanza y operaciones conexas; determina los requisitos para la matanza en las explotaciones dedicadas a la producción de animales de peletería y en las explotaciones en que se maten pollitos de hasta 72 horas o huevos embrionados; e incluye algunas previsiones sobre el vaciado sanitario, la comercialización de productos de equipamiento de sujeción y aturdimiento, la matanza de emergencia fuera del matadero y la matanza para consumo doméstico privado, así como sobre infracciones y sanciones administrativas.

1.8. Otras normas de interés

Además de las normas reseñadas, en el período objeto de análisis pueden mencionarse otras normas de interés. Destacamos, desde una perspectiva internacional, el Instrumento de Aceptación de la Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre

(Washington, 3 de marzo de 1973), adoptada en Gaborone el 30 de abril de 1983¹⁴; el Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Cooperación para la Protección de las Costas y de las Aguas del Atlántico Nordeste contra la Polución, hecho en Lisboa el 17 de octubre de 1990¹⁵; y el Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional relativo al Acuerdo de Cooperación para la Protección de las Costas y de las Aguas del Atlántico Nordeste contra la Polución, hecho en Lisboa el 20 de mayo de 2008¹⁶.

Asimismo, se mencionan algunas normas de interés en ámbitos sectoriales diversos. En el ámbito organizativo, cabe destacar la Orden AAA/2272/2013, de 27 de noviembre, que crea la Comisión Permanente para Situaciones de Adversidad Climática o Medioambiental (COPAC) como órgano colegiado adscrito a la Subsecretaría del Ministerio que tiene como objetivos prioritarios la centralización, la promoción, el desarrollo, la coordinación y el seguimiento de las medidas adoptadas en el ámbito del sector agrario, pesquero, forestal y medioambiental en situaciones de adversidad climática o medioambiental inesperadas e inusitadas en cuanto a su duración, intensidad o extensión territorial, para conseguir la mayor eficacia en su aplicación y su adecuación a la magnitud de los daños ocasionados. En materia de energía, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto-Ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014; el Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE); y el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación¹⁷. En materia de protección de la naturaleza, el Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de comunicación entre las administraciones autonómicas, estatal y comunitaria de la información oficial de los espacios protegidos red Natura 2000; y la Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre,

¹⁴ BOE, núm. 270, de 11 de noviembre de 2013.

¹⁵ BOE, núm. 28, de 1 de febrero de 2014.

¹⁶ BOE, núm. 28, de 1 de febrero de 2014.

¹⁷ En este ámbito, téngase en cuenta también la Resolución de 21 de enero de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014.

por la que se regula el procedimiento de comunicación a la Comisión Europea de las medidas compensatorias en materia de conservación de la red Natura 2000 adoptadas en relación con planes, programas y proyectos, y de consulta previa a su adopción, previstas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad¹⁸. En materia de aguas, la Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, por la que se desarrolla, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la aplicación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. En materia de vegetales, el Real Decreto 148/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros, y el Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio nacional. En materia de vehículos, el Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)”. Y, en materia de protección civil, el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.

1.9. El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante el Acuerdo de 13 de diciembre de 2013, el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, dando cumplimiento así a una de las obligaciones establecidas por la Directiva Marco de Residuos y a las previsiones establecidas por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

El objetivo último de este programa es la reducción de los residuos generados en 2020 en un 10% respecto del peso de los residuos generados en 2010. Con esta finalidad, se articula en torno a cuatro líneas estratégicas destinadas a incidir en los elementos clave

¹⁸ En materia de protección de la naturaleza, ténganse en cuenta también la Resolución de 20 de noviembre de 2013, de Parques Nacionales, por la que se publica la aprobación por la Unesco de tres reservas de la biosfera españolas: Las Mariñas Coruñesas y Terras de Mandeo (Galicia), Terres de l'Ebre (Cataluña) y Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar (Castilla y León), y la ampliación de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala (Aragón); y la Resolución de 21 de enero de 2014, de Parques Nacionales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de enero de 2014 por el que se amplían los límites del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel por incorporación de terrenos colindantes al mismo.

de la prevención de residuos: reducción de la cantidad de residuos; reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos; reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y productos; y reducción de los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente de los residuos generados. En cada línea estratégica se identifican los productos o sectores de actividad en los que se actuará prioritariamente, proponiendo las medidas de prevención más efectivas. La puesta en práctica de estas medidas depende de múltiples acciones en distintos ámbitos en las que están implicados los fabricantes, el sector de la distribución y el sector servicios, los consumidores y usuarios finales y las administraciones públicas. El Programa también prevé una evaluación bienal de los avances logrados en materia de prevención.

2. Derecho y políticas ambientales autonómicas

A diferencia de lo que había venido sucediendo en crónicas anteriores, en las que advertíamos de la escasa actividad normativa de Cataluña en materia de protección del medio ambiente y de una pérdida de protagonismo de esta materia, en el período examinado se han acometido importantes reformas legislativas en materia ambiental. Aunque no se ha aprobado ninguna norma con rango de ley específicamente en materia ambiental, paradójicamente se han modificado un buen número de leyes ambientales. La técnica legislativa empleada ha sido, como ya había sucedido en 2011 y 2012, la utilización de una ley de acompañamiento a los presupuestos para modificar, entre otras, algunas de las principales leyes ambientales catalanas. De nuevo se utiliza una ley de medidas fiscales, financieras y administrativas para introducir algunas reformas de importancia en materia ambiental. En efecto, a través de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público, se han modificado, entre otras leyes ambientales, la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades; la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales; la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno; el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos; el Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña; y la Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Cataluña. Asimismo, la Ley 2/2014 también ha introducido

una interesante modificación en el texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por cuanto supone la prohibición, de forma indirecta, del *fracking* en Cataluña.

En este período, aun cuando todavía no se ha acometido la necesaria reforma de la legislación catalana a estos efectos, también se han dado los primeros pasos para la aplicación en Cataluña de la Directiva de Emisiones Industriales y su transposición estatal, que afecta a las actividades incluidas en el anexo I.1 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental. De este modo, para dar cumplimiento a esta normativa, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha adoptado un procedimiento simplificado y a corto plazo de revisión anticipada de unas 1.300 autorizaciones ambientales vigentes. Asimismo, la Dirección General de Calidad Ambiental ha aprobado el primer Plan de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña, para el período 2014-2016, y el Programa de Inspección Ambiental Integrada, aprobado anualmente.

En cuanto a los proyectos de ley en trámite, en este período ha iniciado su tramitación el Proyecto de Ley de creación del impuesto sobre las emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno a la atmósfera que produce la aviación comercial, del impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica por su incidencia en el medio ambiente y del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera; y continúa su curso la tramitación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego, con el fin de posibilitar la instalación en Cataluña del macroproyecto de casinos, hoteles y tiendas Barcelona World, estando a punto de emitirse en estos momentos el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Proyecto de Ley, a petición de ICV-EUiA y la CUP, contrarios al proyecto.

Desde el punto de vista de las iniciativas y actuaciones de interés político, resulta de interés la aprobación por el Gobierno de la Estrategia para promover la activación de la gestión forestal sostenible a través del aprovechamiento energético de la biomasa forestal y agrícola y de la Estrategia Catalana para la Renovación Energética de Edificios.

Por otro lado, en el ámbito de la planificación se han aprobado algunos planes de acción en materia de contaminación acústica para algunas aglomeraciones de ámbito supramunicipal. Asimismo, sigue su tramitación el nuevo Plan de Actuación para la

Mejora de la Calidad del Aire, sometido a información pública, junto con el informe de sostenibilidad ambiental del Plan, en fecha 11 de noviembre de 2013, con el fin de recoger acciones concretas a llevar a cabo en los 40 municipios de la región metropolitana de Barcelona declarados como zona de protección especial para reducir las emisiones de contaminantes y mejorar la calidad del aire y así rebajar los niveles de óxido de nitrógeno y partículas de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en el ambiente atmosférico hasta los límites fijados por la normativa europea. En materia de residuos, la Agencia de Residuos de Cataluña está elaborando el nuevo Programa General de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña 2013-2020 (PRECAT20), que fusiona en un solo documento la gestión de los residuos municipales, industriales y de la construcción; y también está trabajando en el nuevo Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 2013-2020 (PINFRECAT20), que ha de marcar las nuevas bases del modelo de gestión y distribución territorial, asegurando que la red de infraestructuras funcione con eficacia y con capacidad para definir las necesidades futuras. Por su parte, la Agencia Catalana del Agua ha comenzado los procesos de participación vinculados con la revisión del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña y su Programa de medidas. Por último, también se ha aprobado inicialmente, a finales de 2013, por parte de la Comisión de Política Territorial y Urbanismo de Cataluña, la modificación de los planes directores urbanísticos del sistema costero.

2.1. La Ley 1/2014, de 27 de enero, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2014 y su impacto sobre el Canon del Agua

La Ley 1/2014, de 27 de enero, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2014, incluye en su título V algunas normas tributarias que afectan al Canon del Agua. Concretamente, determina los valores de base por volumen para usos domésticos e industriales y asimilables y el valor de cada unidad de parámetro de contaminación del Canon del Agua, al efecto de determinar el tipo de gravamen específico de una manera individualizada durante el año 2014; los valores para determinar la cuota del Canon del Agua correspondiente a los establecimientos ganaderos; y los valores para la determinación objetiva de la cuota correspondiente a usos industriales de agua para la producción de energía eléctrica, efectuados por centrales hidroeléctricas.

2.2. El impacto de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público, sobre la legislación ambiental: modificaciones legislativas en materia de ordenación ambiental y de aguas y de agricultura, pesca, alimentación y medio natural

A través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat (la Ley 2/2014, de 27 de enero, de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público) se han modificado diversas leyes ambientales. De nuevo, como ya se había hecho en años anteriores, se emprende la modificación en una única ley de muchas otras en materia de medio ambiente o en ámbitos conexos con este. Estas modificaciones coinciden, además, con las de muchas otras leyes en los ámbitos fiscal, financiero, del sector público..., sin relación aparente con las primeras, todo ello bajo el mismo paraguas y tramitándose en el mismo procedimiento legislativo. La técnica legislativa seguida merece ser objeto de crítica, habida cuenta de que se regulan en un texto único las modificaciones de diversas normas con rango de ley sobre materias muy diversas, sin hilo conductor entre ellas. Asistimos, de esta forma, a un proceso caótico de reformas legislativas, utilizándose una ley de acompañamiento, presentada junto con la Ley de Presupuestos, para modificar un amplio número de normas con rango ley que afectan a un conglomerado de materias y normas diversas sin conexión entre ellas.

La Ley 2/2014, en su título VI, procede a realizar diversas modificaciones legislativas en materia de vivienda y urbanismo, de ordenación ambiental, de ordenación de aguas y de ordenación territorial. En los apartados siguientes se da cuenta de las principales modificaciones en materia ambiental.

A. La modificación de la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales

La Ley 2/2014 modifica el apartado 2 del artículo 16 de la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales. Con esta modificación, a los dos instrumentos ya previstos para la delimitación definitiva de los límites de cada uno de los espacios incluidos en el Plan de Espacios de Interés Natural (la declaración de alguna de las figuras de protección especial —parques nacionales, parajes nacionales de interés nacional, reservas naturales y parques naturales— y el planeamiento especial a que se refiere el artículo 5 de esta ley), se une un tercero: una resolución de la persona titular del departamento competente en el diseño del sistema de espacios naturales protegidos de Cataluña.

B. La modificación de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno

La Ley 2/2014 también introduce algunas modificaciones en la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno. Tres son las modificaciones más importantes. En primer lugar, a las medidas de protección del medio nocturno se incorporan nuevas tecnologías de iluminación, como los diodos emisores de luz y otras lámparas de haluros cerámicos, al preverse que en los procesos de renovación del alumbrado público deben sustituirse las lámparas de vapor de mercurio de alta presión (VM) por otras de menor emisión de radiación de longitud de onda corta y mayor eficacia luminosa, tendiendo a la reducción de la potencia instalada.

En segundo lugar, se modifica el régimen sancionador. En particular, se modifica la tipificación de las infracciones administrativas, que pueden ser leves, graves o muy graves (art. 16); y también las sanciones administrativas (art. 19), incrementándose la cuantía de las sanciones que pueden imponerse de 200 a 800 euros en caso de sanción de infracciones leves, de 801 a 4.000 euros en caso de sanción de infracciones graves y de 4.001 a 40.000 euros en caso de sanción de infracciones muy graves.

En tercer lugar, se modifica el apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley 6/2001, que ahora establece que el alumbrado exterior existente debe cumplir las prescripciones de esta ley en las condiciones que establezca el reglamento que la desarrolle¹⁹.

C. La modificación de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades

La Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades, ha vuelto a ser objeto de modificación a través de una ley de acompañamiento de los presupuestos. Con esta ya son cuatro las modificaciones que ha

¹⁹ Para la correcta interpretación de esta disposición transitoria, véase la Nota informativa sobre la realización de los controles ambientales de contaminación luminosa de las actividades sujetas a la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades, de 30 de enero de 2014 (accesible en el siguiente enlace: <http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Atmosfera/Contaminacio%20luminosa/doc/Nota%20controls%20ambientals%20activitats.pdf> —último acceso, 31 de marzo de 2014—).

experimentado la Ley 20/2009, a pesar de ser una ley relativamente reciente, sin olvidar que en un futuro próximo deberá ser objeto de otra modificación para su adaptación a la Directiva 2010/75/UE, de emisiones industriales, y a la legislación básica estatal que ha incorporado esta directiva (la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; y el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002).

Son muchos los preceptos de la Ley 20/2009 que son objeto de modificación, por lo que únicamente vamos a destacar algunas de las modificaciones más importantes. En primer lugar, a través de la modificación del artículo 33 se especifican los casos en que la persona o la empresa titular de las actividades que están clasificadas en los anexos II y III debe formular una consulta previa a la Administración respecto a su sometimiento a una evaluación de impacto ambiental, en aplicación de los criterios fijados en el anexo V. Son los supuestos siguientes: cuando estas actividades afecten directamente a espacios naturales con una sensibilidad ambiental elevada incluidos en el Plan de Espacios de Interés Natural; en los espacios naturales de protección especial declarados de acuerdo con la Ley 12/1985; en las zonas húmedas y las áreas designadas en aplicación de las directivas 2009/147/CE y 92/43/CE (red Natura); en zonas húmedas incluidas en la lista del Convenio de Ramsar, y en otros espacios protegidos que se determinen legalmente; y, en el caso de las actividades del anexo II, cuando se determine específicamente en el epígrafe correspondiente de este anexo.

En segundo lugar, se modifica el régimen de intervención ambiental en espectáculos públicos y actividades recreativas y otras actividades de competencia municipal sectorial, recogido en el artículo 56 de la Ley 20/2009. Para estas actividades, tras esta modificación, ya no será posible exigir, en ningún caso, comunicación ambiental o licencia ambiental. La intervención ambiental en todas las actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas se integra ahora en el procedimiento de otorgamiento de la licencia municipal o la autorización sectorial mediante un informe ambiental del órgano técnico municipal o comarcal, que contendrá las determinaciones establecidas por la normativa en esta materia, o, en su caso, en las condiciones establecidas para el

régimen de comunicación²⁰. En coherencia con esta modificación, también se derogan el código 12.59 del anexo III y el anexo IV de la Ley 20/2009.

En tercer lugar, se modifican los artículos 59 y 67, que afectan, respectivamente, a la intervención administrativa en las modificaciones de las actividades y a las especificidades de las explotaciones ganaderas y de otros tipos de instalaciones.

En cuarto lugar, también se establecen algunas modificaciones que afectan al régimen de control (inicial y periódico) de las actividades. En particular, destacamos la supresión del régimen de control ambiental para las actividades sometidas al régimen de declaración de impacto ambiental y autorización sustantiva del anexo I.3 y para las actividades anteriormente recogidas en el anexo IV, ya que este anexo queda derogado, como hemos comentado anteriormente.

Finalmente, también destacamos la modificación que afecta a las multas coercitivas (pasan de una cuantía máxima de 3.000 euros a 15.000 euros) y la que afecta al apartado 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 20/2009 (en su nueva redacción prevé que las actividades clasificadas en el anexo III que a la entrada en vigor de esta ley dispongan de licencia de actividades queden exentas de tener que hacer la comunicación ambiental, siendo el régimen de controles de estas actividades el correspondiente a las actividades del anexo III, que debe establecerse por reglamento).

D. La modificación de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de Promoción de la Actividad Económica, en relación con la prevención y el control ambiental de las actividades ganaderas

La Ley 2/2014 también modifica la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de Promoción de la Actividad Económica. En particular, destacamos la modificación que afecta al régimen aplicable a los controles periódicos de las actividades ganaderas que disponían de autorización ambiental en la fecha de entrada en vigor de la Ley 9/2011 porque en su momento estaban en el anexo I y se sujetaban a autorización ambiental, pero actualmente están incluidas en el anexo II y requerirían licencia ambiental. Si bien

²⁰ Con anterioridad a esta reforma, se sujetaban a comunicación ambiental las actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas no incluidas en la legislación específica que regula esta materia, en los términos que se establecieran por reglamento (código 12.59 del anexo III de la Ley 20/2009); y a licencia ambiental las actividades específicamente determinadas en el anexo IV que en la normativa administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas no estaban sujetas a un régimen de licencia.

inicialmente la Ley 9/2011 estableció que estas actividades, a pesar de haber cambiado de anexo, mantenían el régimen de control establecido por la autorización otorgada, ahora se cambia el criterio y se dispone que pasan a regirse por el régimen de control establecido para las actividades del anexo II.

E. La modificación del Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, mediante el cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

El Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, mediante el cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, también resulta modificado por la Ley 2/2014. Las modificaciones afectan a los artículos 8 (Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales), 19 (espacios degradados y suelos contaminados), 24.4 y 74, 75, 76, 86, 87 y 120 (en materia sancionadora, relativos, respectivamente, a infracciones muy graves, graves y leves; criterios objetivos y subjetivos; y prescripción de infracciones).

Asimismo, se añade un nuevo artículo 21 ter en relación con la recuperación voluntaria de suelos y un nuevo apartado 5 en el artículo 26 que afecta a la gestión de aceites industriales usados. En relación con el primero de estos preceptos añadidos, prevé que la descontaminación del suelo pueda llevarse a cabo sin la declaración previa del suelo como contaminado mediante la presentación ante la Agencia de Residuos de Cataluña de un proyecto de recuperación voluntaria. Este proyecto debe ser aprobado por el órgano competente, debe considerar todo el alcance de la afectación y debe acompañarse de la valoración de riesgos que acredita la existencia de un riesgo inaceptable. Respecto a los aceites industriales usados generados en Cataluña, deben tratarse, exclusivamente, por la vía de su regeneración, haciéndose uso de las mejores técnicas disponibles.

F. La modificación del Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, mediante el cual se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña

En materia de aguas, la Ley 2/2014 introduce diferentes modificaciones en el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, con el fin de incorporar el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, en adaptación de la

Directiva Marco del Agua, que establece la necesidad de que los Estados miembros tengan en cuenta este principio. De este modo, con relación al ámbito económico financiero y a la exigencia de los tributos que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente, las administraciones titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento deben tener presente el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. También se configura como objetivo de la planificación hidrológica del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña garantizar este principio mediante el establecimiento de un sistema de tarificación que ofrezca incentivos para conseguir un uso eficiente del agua y el logro de los objetivos fijados por el Gobierno. A estos efectos, la Administración competente en materia de suministro de agua y de tratamiento de aguas residuales debe establecer las estructuras tarifarias necesarias para la recuperación de costes, a fin de garantizar así el respeto de las necesidades básicas y desincentivar consumos excesivos. Estas tarifas deben responder a los criterios de repercusión de los costes en los precios que fija la Generalitat, sin perjuicio de las compensaciones que, en los casos de prestación de los servicios en régimen de concesión administrativa, pueda establecer la Administración titular del servicio de suministro de agua para fijar el equilibrio económico del servicio.

G. La modificación de la legislación en materia forestal

En materia forestal, la Ley 2/2014 introduce algunas modificaciones en materia forestal. En primer lugar, modifica la Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Cataluña, con el fin de simplificar los procesos de tramitación de las actividades reguladas por esta ley, especialmente los aprovechamientos de los recursos forestales.

En segundo lugar, se modifican la Ley 7/1999, de 30 de julio, del Centro de la Propiedad Forestal, y la Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana, que amplía su ámbito de aplicación y pasa a incluir urbanizaciones, núcleos de población, edificaciones e instalaciones situadas en terrenos forestales o en la franja de 500 metros que los rodea.

H. La nueva regulación de la producción agroalimentaria ecológica y de la producción integrada

La Ley 2/2014 regula de nuevo los ámbitos de la producción agroalimentaria ecológica y de la producción integrada agraria. Por una parte, se regula ampliamente la producción agroalimentaria ecológica, definida como un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de los recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores para productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. En particular, se regula el régimen de control de la producción agroalimentaria ecológica; se designa la autoridad competente responsable en materia de producción agroalimentaria ecológica (el departamento competente en esta materia); se regula ampliamente el Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica, que es una corporación de derecho público configurada como autoridad de control para la aplicación del régimen de control establecido por el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, en Cataluña; se incluyen algunas previsiones sobre la protección de los términos referidos a la producción agroalimentaria ecológica, los mecanismos de control de la actuación del Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica y la financiación de este organismo; y se regula el régimen sancionador en materia de producción agroalimentaria ecológica.

Por otra, también se introduce una nueva regulación de la producción integrada, definida como el sistema agrario de producción y obtención de alimentos de calidad, frescos o transformados, y otros productos que prioriza la utilización de los recursos y mecanismos de regulación naturales, con el objetivo de optimizar los métodos de producción, evitar las aportaciones perjudiciales al medio ambiente y asegurar a largo plazo una agricultura y una ganadería sostenibles. En particular, se determinan la naturaleza (corporación de derecho público) y el régimen de funcionamiento del Consejo Catalán de la Producción Integrada, cuyas finalidades son la representación, la defensa, la garantía y la promoción de la producción integrada; se regulan la protección de los términos referidos a la producción integrada, los mecanismos de control de la actuación del Consejo Catalán de la Producción Integrada, el control y la certificación de los productos de producción integrada y la financiación del Consejo Catalán de la Producción Integrada; y se establece el régimen sancionador en materia de producción integrada.

Por último, también se modifica la Ley 14/2003, de 13 de junio, de Calidad Agroalimentaria, con el fin de introducir alguna modificación en las infracciones administrativas.

I. La modificación de la Ley 2/2010, de 18 de febrero, de Pesca y Acción Marítimas, y la Ley 22/2009, de 23 de diciembre, de Ordenación Sostenible de la Pesca en Aguas Continentales

En materia de pesca, la Ley 2/2014 ha modificado la Ley 2/2010, de 18 de febrero, de Pesca y Acción Marítimas, para determinar los órganos competentes para incoar e imponer sanciones en los expedientes sancionadores e introducir algunas modificaciones que afectan a las infracciones y sanciones administrativas; y la Ley 22/2009, de 23 de diciembre, de Ordenación Sostenible de la Pesca en Aguas Continentales, para establecer nuevas infracciones administrativas en esta materia y modificar algunas de las ya previstas.

2.3. El impacto de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público, sobre la legislación urbanística: la prohibición indirecta del fracking

La Ley 2/2014 también ha modificado diferentes preceptos del texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. De estas modificaciones destacamos, sin duda, la del artículo 47, ya que supone la prohibición del *fracking* en Cataluña. Se añade un apartado, el 10, al artículo 47 en el que se establece que en la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de aprovechamientos de hidrocarburos, no está permitido utilizar la tecnología de la fractura hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o con relación a otros ámbitos competenciales de la Generalitat. En la práctica, ello implica que no podrán otorgarse los permisos urbanísticos para construir y poner en marcha en territorio catalán instalaciones con el objeto de utilizar esta técnica de extracción de hidrocarburos. De esta forma, Cataluña se une a otras comunidades autónomas como Cantabria, La Rioja y Navarra que ya han prohibido el *fracking*, aunque en el caso de Cataluña no se hace a través de una ley específica que prohíbe de forma directa el uso

de esta técnica, sino de forma indirecta a través de una modificación de la legislación urbanística que conduce a un resultado similar.

2.4. Otras normas de interés

Además de las reseñadas, en el período objeto de análisis se han aprobado algunas otras normas de interés desde la perspectiva ambiental. Destacamos, en primer lugar, en el ámbito organizativo, la aprobación del Decreto 270/2013, de 23 de diciembre, de reestructuración del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, que simplifica su estructura, con el objeto de mejorar la eficiencia y la eficacia de las actuaciones administrativas, y la hace extensiva a los servicios territoriales.

En segundo lugar, la aprobación del Decreto 40/2014, de 25 de marzo, de Ordenación de las Explotaciones Ganaderas, cuyo objeto es establecer los requisitos que deben cumplir estas explotaciones; establecer el régimen de autorización o comunicación del inicio de la actividad ganadera e inscripción en el Registro; regular el Registro de explotaciones ganaderas; regular el Directorio de operadores en el sector de la ganadería; y determinar el régimen de inspección y sancionador en el ámbito de las explotaciones ganaderas. Su ámbito de aplicación se extiende a las explotaciones ganaderas de animales de producción que se detallan en el anexo I que se críen o se mantengan con finalidad productiva, así como a las instalaciones de recogida, almacenamiento y distribución de material genético de animales de producción, a los operadores comerciales con o sin instalaciones, a las instalaciones de concentración de animales, a los pastos, a las instalaciones para la práctica ecuestre, a las instalaciones de équidos de ocio y a las empresas integradoras. En cualquier caso, debe tratarse de explotaciones ganaderas ubicadas en el ámbito territorial de Cataluña.

En tercer lugar, cabe mencionar el Decreto 6/2014, de 14 de enero, de creación de la Junta Rectora del Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter, como órgano rector de este parque natural, con la composición, las funciones y el régimen jurídico previsto en este decreto; y la Orden TES/341/2013, de 16 de diciembre, por la que se crea y se organiza el Registro de Seguridad de Presas y Embalses de Cataluña.

En materia de protección de la naturaleza, también debe destacarse el Acuerdo GOV/166/2013, de 3 de diciembre, por el que se declaran zonas especiales de

conservación (ZEC) de la región biogeográfica mediterránea, integrantes de la red Natura 2000, siete lugares de importancia comunitaria situados en la Plana de Lleida. El instrumento de gestión aplicable a estas zonas es el Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje de los Espacios Naturales Protegidos de la Plana de Lleida y el Plan de Gestión de estos espacios, aprobados mediante el Acuerdo GOV/185/2010, de 11 de octubre. Y el Acuerdo GOV/176/2013, de 17 de diciembre, por el cual se declaran las zonas especiales de conservación de la región biogeográfica alpina, integrantes de la red Natura 2000, y se aprueba su instrumento de gestión.

2.5. La aplicación de la Directiva de Emisiones Industriales en Cataluña

La aplicación de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, y de la normativa de transposición del Estado (Ley 5/2013, de 11 de junio, y Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre) en Cataluña ha sido uno de los ejes sobre los cuales ha gravitado la actuación del Departamento de Territorio y Sostenibilidad estos últimos meses. Por una parte, para cumplir esta normativa, se ha procedido a realizar una revisión de unas 1.300 autorizaciones ambientales vigentes. Por otra, se ha aprobado el primer Plan de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña, para el período 2014-2016, y el Programa de Inspección Ambiental Integrada, aprobado anualmente.

A. La revisión de las autorizaciones ambientales vigentes

La Ley 16/2002, de 1 de julio, tras su modificación por la Ley 5/2013 incluye, en su disposición transitoria primera, un procedimiento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas en virtud del cual el órgano ambiental competente comprobará de oficio, mediante un procedimiento simplificado, la adecuación de la autorización a las prescripciones de la nueva Directiva de Emisiones Industriales. Se establece como fecha límite para la actualización de las autorizaciones el 7 de enero de 2014.

Para dar cumplimiento a esta obligación de adecuación de las autorizaciones ambientales existentes a los nuevos requerimientos ambientales impuestos por la Directiva de Emisiones Industriales, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, ha adoptado un procedimiento simplificado y a corto plazo de revisión anticipada de 1.300 autorizaciones ambientales

vigentes en Cataluña, enmarcado en los acuerdos del Gobierno sobre simplificación administrativa. La adaptación al proceso de aplicación de esta directiva en Cataluña se ha hecho en línea con la voluntad del Gobierno de reducir y minimizar las cargas administrativas. De este modo, se han agilizado y simplificado los trámites para facilitar el ejercicio de las actividades económicas y no añadir nuevas cargas, adoptando un procedimiento que comporta el mínimo impacto económico y administrativo para el tejido productivo.

B. La aprobación del Plan y del Programa de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña

La Directiva de Emisiones Industriales y la normativa española de transposición introducen una regulación novedosa del régimen de inspección de las instalaciones que se traduce principalmente en la obligación de establecer un sistema de inspección medioambiental de las instalaciones y de formular planes de inspección a partir de los cuales se elaborarán programas de inspección medioambiental prefijada que incluyan la frecuencia de las visitas a los emplazamientos para los distintos tipos de instalaciones. Para dar cumplimiento a estas exigencias, la Dirección General de Calidad Ambiental ha aprobado el primer Plan de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña, para el período 2014-2016, con el objetivo general de comprobar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental y los requisitos establecidos en las autorizaciones ambientales integradas de los establecimientos que lleven a cabo actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio. Asimismo, ha aprobado el Programa de Inspección Ambiental Integrada, que constituye un elemento principal para ejecutar las actuaciones de inspección ambiental integrada, además de permitir el seguimiento y la vigilancia de los establecimientos. A partir de un proceso de evaluación de riesgo de los establecimientos se seleccionan aquellos que serán objeto de una actuación de inspección ambiental integrada a lo largo del año. Los establecimientos que estén incluidos en el Programa de Inspección Ambiental Integrada anual serán informados individualmente desde la unidad gestora (Servicio Territorial correspondiente o Servicio de Seguimiento e Información de Actividades de la Dirección General de Calidad Ambiental) y se les requerirá para que una entidad colaboradora realice, en nombre de la Administración, la acción material de inspección

ambiental antes de la fecha límite fijada en el mismo requerimiento. Finalizada la inspección ambiental, en el plazo máximo de cuatro meses se publicará el informe sobre el grado de cumplimiento del establecimiento.

2.6. Algunas actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección del medio ambiente

A. La Estrategia para Promover el Aprovechamiento Energético de la Biomasa Forestal y Agrícola

Mediante el Acuerdo GOV/22/2014, de 18 de febrero, el Gobierno ha aprobado la Estrategia para Promover el Aprovechamiento Energético de la Biomasa Forestal y Agrícola, que se incorpora como anexo. Esta estrategia se inscribe en los objetivos del nuevo Plan General de Política Forestal de Cataluña 2014-2024, así como en los de la Estrategia 2020 de la Unión Europea y del Plan de la Energía y el Cambio Climático de Cataluña 2012-2020 (PECAC 2020), aprobado por el Gobierno en la sesión de 9 de octubre de 2012 y que hace una apuesta decidida por el aprovechamiento energético de la biomasa forestal, proponiendo una estrategia singular específica en este ámbito.

Con esta estrategia, aprobada para promover la activación de la gestión forestal sostenible en Cataluña a través del aprovechamiento energético de la biomasa forestal y agrícola de Cataluña, se pretende mejorar el estado de los bosques y su biodiversidad, reducir el riesgo de incendios y los efectos del cambio climático, y contribuir a la recuperación económica a través de la activación del sector forestal y la dinamización de las zonas rurales. Sus objetivos esenciales son el aprovechamiento energético de la biomasa forestal activando la cadena forestal para mejorar el estado de los bosques de Cataluña, reducir la carga de combustible que se acumula, reducir el riesgo de incendios y potenciar la resiliencia de las masas forestales, lo que favorece la mejora de la biodiversidad y la reducción de los efectos negativos del cambio climático y de los riesgos naturales.

B. La Estrategia Catalana para la Renovación Energética de Edificios

Con fecha 25 de febrero de 2014, el Gobierno ha aprobado la Estrategia Catalana para la Renovación Energética de Edificios, en el marco del proyecto MARIE (“Repensando

los edificios mediterráneos para mejorar su eficiencia energética”) del programa europeo MED, liderado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya. Esta estrategia nace con los siguientes objetivos: la reactivación del sector de la construcción; la concienciación de la ciudadanía de los beneficios de la renovación energética; la reducción del 14,4% del consumo estimado de energía final del parque edificado residencial y terciario; la disminución del 22% de las emisiones de CO₂; la consecución de un ahorro de un 21% del ahorro económico del parque edificado, equivalente a 800 millones de euros; y la voluntad de intervenir en el 61% de los inmuebles de Cataluña. A estos efectos, incluye un plan de acción dividido en cinco ejes centrales (sistema de información con los datos del parque edificado catalán; plataforma de encuentro; catálogo de productos y servicios; organización y simplificación normativa; y programa de inversiones y mecanismos financieros) que integrará el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios y Equipamientos de la Generalitat de Catalunya 2011-2014, junto con una hoja de ruta con el horizonte 2020.

También se crean el Comité Ejecutivo para la Implementación de la Estrategia Catalana para la Renovación Energética de Edificios, como órgano colegiado adscrito al departamento competente en materia de vivienda, y la Comisión Interdepartamental de Renovación Energética de Edificios en Cataluña, como órgano colegiado adscrito al departamento competente en materia de energía.

C. El establecimiento de una moratoria para determinadas infraestructuras de gestión de residuos

El Acuerdo GOV/158/2013, de 12 de noviembre, ha establecido una nueva moratoria en la admisión a trámite de solicitudes correspondientes a infraestructuras de gestión de residuos relativas a depósitos controlados de clase II, desde el 26 de octubre de 2013 hasta la aprobación del Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales o, en todo caso, por un plazo máximo de dos años, a contar desde el 26 de octubre de 2013.

D. La aprobación de algunos planes de acción en materia de contaminación acústica

A finales de 2013 se han aprobado definitivamente por la directora general de Calidad Ambiental dos planes de acción en materia de contaminación acústica: el de la aglomeración de ámbito supramunicipal Baix Llobregat I, constituida por los municipios de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern (Resolución TES/2673/2013, de 25 de noviembre); y el de la aglomeración de ámbito supramunicipal Barcelonès II, constituida por los municipios de Badalona y Santa Coloma de Gramenet (Resolución TES/2677/2013, de 25 de noviembre).

Sumari. 1. Dret estatal aplicable a Catalunya. 1.1. La nova Llei d'avaluació ambiental. 1.2. La reordenació de les competències ambientals dels ens locals després de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local. A. Les competències dels municipis. B. Les competències de les províncies. C. L'excepcionalitat del règim de llicència en l'àmbit local: la protecció del medi ambient com a excepció. 1.3. Algunes lleis no ambientals d'interès des del punt de vista ambiental. A. La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern: el seu impacte sobre l'accés a la informació ambiental. B. La Llei de garantia de la unitat de mercat: la protecció del medi ambient com a excepció que justifica l'exigència d'autorització. 1.4. Novetats en l'àmbit nuclear. 1.5. Novetats pel que fa al canvi climàtic. 1.6. Avenços pel que fa a la planificació hidrològica: l'aprovació del Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre. 1.7. Novetats pel que fa a la protecció d'animals. 1.8. Altres normes i actuacions d'interès. 1.9. El Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020. 2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques. 2.1. La Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 i el seu impacte sobre el cànon de l'aigua. 2.2. L'impacte de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic sobre la legislació ambiental: modificacions legislatives relatives a l'ordenació ambiental i d'aigües i d'agricultura, pesca, alimentació i medi natural. A. La modificació de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. B. La modificació de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. C. La modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. D. La modificació de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, en relació amb la prevenció i control ambiental de les activitats ramaderes. E. La modificació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus. F. La modificació del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la legislació pel que fa a les aigües de Catalunya. G. La modificació de la legislació en l'àmbit forestal. H. La nova regulació de la producció agroalimentària ecològica i de la producció integrada. I. La modificació de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes i la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. 2.3. L'impacte de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic sobre la legislació urbanística: la prohibició indirecta del *fracking*. 2.4. Altres normes d'interès. 2.5. L'aplicació de la directiva d'emissions industrials a Catalunya. A. La revisió de les autoritzacions ambientals vigents. B. L'aprovació del Pla i del Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya. 2.6. Algunes actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció del medi ambient. A. L'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. B. L'Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis. C. L'establiment d'una moratòria per a determinades infraestructures de gestió de residus. D. L'aprovació d'alguns plans d'acció pel que fa a contaminació acústica.

1. Dret estatal aplicable a Catalunya

Durant el període objecte d'anàlisi (de l'1 de novembre de 2013 al 31 de març de 2014) en l'àmbit estatal ha prosseguit l'onada de reformes legislatives pel que fa al medi ambient. A l'aprovació de la reforma de la Llei de costes i de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovades durant el primer semestre de 2013, li ha seguit ara l'aprovació, a finals de 2013, de la nova Llei d'avaluació ambiental, que unifica en un únic text normatiu la regulació de l'avaluació ambiental de plans i programes i l'avaluació d'impacte ambiental de projectes. Sens dubte, és la norma més destacable en aquest període pel que fa a la protecció del medi ambient.

Com és habitual, en aquests mesos també s'han aprovat diverses normes reglamentàries en diversos àmbits sectorials (energia nuclear, animals, canvi climàtic...), en alguns casos per complir exigències derivades del dret de la Unió Europea; i s'ha continuat

avançant en l'elaboració de nous plans hidrològics, amb l'aprovació del Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre.

En aquest període també s'ha posat de manifest la conflictivitat competencial entre Estat i comunitats autònomes. Bona prova en són els recursos d'inconstitucionalitat promoguts pel president del Govern contra la Llei de Cantàbria 1/2013, de 15 d'abril, per la qual es regula la prohibició al territori de la Comunitat Autònoma de Cantàbria de la tècnica de fractura hidràulica com a tècnica d'investigació i extracció de gas no convencional²¹; pel Govern de Catalunya contra determinats preceptes, quant a la redacció dels apartats 7 i 8 de l'article 9 de la Llei del sòl, Text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, i final divuitena de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes²²; i per la Junta d'Extremadura contra determinats preceptes del Reial decret llei 2/2013, d'1 de febrer, de mesures urgents en el sistema elèctric i en el sistema financer²³. Així mateix, s'han plantejat algunes qüestions d'inconstitucionalitat²⁴ i uns quants conflictes positius de competència²⁵.

Quant als projectes de llei en tràmit, en aquest període han iniciat la seva tramitació parlamentària dos projectes de llei d'interès ambiental: el Projecte de llei de parcs

²¹ Admès a tràmit pel Ple del Tribunal Constitucional, per la Providència d'11 de febrer de 2014. BOE núm. 40, de 15 de febrer de 2014.

²² Admès a tràmit pel Ple del Tribunal Constitucional, per la Providència de 5 de novembre de 2013. BOE núm. 273, de 14 de novembre de 2013. Vid. sobre aquesta llei el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 9/2013, de 8 d'agost, emès a sol·licitud del Govern de la Generalitat.

²³ Admès a tràmit pel Ple del Tribunal Constitucional, per la Providència de 19 de novembre de 2013. BOE núm. 286, de 29 de novembre de 2013.

²⁴ Vid. les qüestions d'inconstitucionalitat plantejades per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional amb relació a la disposició addicional tercera del Reial decret llei 14/2010, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la correcció del dèficit tarifari del sector elèctric, per possible vulneració dels articles 9.3 i 14 de la Constitució (BOE núm. 55, de 5 de març de 2014); i Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional amb relació a la disposició addicional catorzena del Text refós de les lleis d'ordenació del territori de Canàries i d'espais naturals de Canàries, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 8 de maig, en la redacció donada per la Llei canària 7/2009, de 6 de maig, sobre declaració i ordenació d'àrees urbanes en el litoral canari per possible vulneració dels articles 149.1.1, 8 i 23 en relació amb l'article 132 de la CE (BOE núm. 55, de 5 de març de 2014).

²⁵ Vid. els conflictes positius de competència promoguts pel Govern de Catalunya contra determinats preceptes del Reial decret 239/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen les normes per a l'aplicació del Reglament (CE) núm. 1221/2009, del Parlament europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió (BOE núm. 262, d'1 de novembre de 2013); i contra determinats preceptes del Reial decret 635/2013, de 2 d'agost, pel qual, en desplegament del "Pla d'Impuls al Medi Ambient en el sector hoteler PIMA Sol" per a la rehabilitació energètica de les seves instal·lacions, es regula l'adquisició de crèdits futurs de carboni pel Fons de carboni per a una economia sostenible (BOE núm. 17, de 20 de gener de 2014). En relació amb aquest últim, vid. el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 18/2013, de 21 de novembre, emès a sol·licitud del Govern de la Generalitat.

nacionals²⁶ i el Projecte de llei pel qual es modifica la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental²⁷. Així mateix, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient prossegueix amb l'elaboració del Reglament de la llei de costes, que es va presentar al Consell Assessor de Medi Ambient i es va obrir a consulta pública el passat mes de març.

Finalment, també cal destacar l'aprovació del Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020, aprovat mitjançant l'Acord del Consell de Ministres de 13 de desembre de 2013. Així mateix, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha anunciat l'impuls del nou Pla Estatal Marc de Gestió de Residus, que s'obrirà a consulta pública pròximament.

1.1. La nova Llei d'avaluació ambiental

El passat 11 de desembre es va publicar al BOE la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental²⁸. Es tracta d'una llei que integra en un únic text normatiu la legislació d'avaluació ambiental estratègica i d'avaluació ambiental de projectes i que suposa la derogació de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient; del Text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener; i del Reial decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució del Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental.

Aquesta llei constitueix la materialització d'una altra de les mesures reformistes de la legislació ambiental anunciades pel ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a principis d'aquesta legislatura, que s'uneix a d'altres recentment aprovades (com la reforma de la Llei de costes o de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació). L'objectiu de la reforma, a més d'unir en un únic cos legal, el règim de jurídic de l'avaluació de plans, programes i projectes, és simplificar i racionalitzar els procediments d'avaluació, i dotar-los de més agilitat, perquè constitueixin un instrument

²⁶ *Butlletí Oficial de les Corts Generals*, Congrés dels Diputats, X Legislatura, Sèrie A, núm. 78-1, de 31 de gener de 2014.

²⁷ *Butlletí Oficial de les Corts Generals*, Congrés dels Diputats, X Legislatura, Sèrie A, núm. 77-1, de 31 de gener de 2014.

²⁸ Sobre aquesta llei, resulta d'interès el Dictamen del *Consell de Garanties Estatutàries* 6/2014, de 14 de febrer, emès a sol·licitud del Govern de la Generalitat.

eficaç per protegir el medi ambient. També pretén establir un marc jurídic comú per a l'avaluació ambiental i assolir la concertació de la normativa sobre avaluació ambiental en tot el territori nacional. Ara bé, no pot ocultar-se la motivació econòmica que en justifica l'aprovació, motivació que, d'altra banda, acompanya moltes de les recents reformes normatives pel que fa al medi ambient, tant d'àmbit estatal com autonòmic, que més enllà de l'ambiental, també es justifiquen com a mesures per pal·liar la crisi. El mateix ministeri ha afirmat que amb aquesta norma, a més d'un nou impuls al desenvolupament sostenible, es preveu generar uns 80.000 llocs de treball i ha de suposar un impacte de 1.000 milions d'euros aproximadament sobre l'activitat econòmica.

Aquesta llei també s'aprova, com posa de manifest l'exposició de motius, "en sintonia amb els principis que animen la revisió de la normativa comunitària sobre l'avaluació ambiental de projectes". En efecte, a la Unió Europea està en procés de revisió la Directiva 2011/92/UE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, i l'aprovació de la directiva que n'ha de modificar alguns preceptes és imminent. A finals de 2012 va veure la llum la Proposta de directiva del Parlament europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2011/92/UE [COM (2012) 628 final, Brussel·les, 26 d'octubre de 2012], l'objectiu de la qual és "adaptar les disposicions de la Directiva EIA codificada per omplir llacunes, reflectir els canvis i reptes ambientals i socioeconòmics actuals i atènyer-se als principis d'una normativa intel·ligent". Es tracta, en definitiva, de millorar la qualitat del procés d'avaluació ambiental, simplificar i racionalitzar les diferents etapes del procediment i augmentar la cohesió i les sinergies amb altres legislacions i polítiques. No obstant això, crida l'atenció, que, a diferència del que és habitual, en aquesta ocasió l'aprovació de la Llei d'avaluació ambiental s'ha dut a terme sense haver-se aprovat encara la nova directiva europea, la qual cosa ha d'obligar a realitzar alguns ajustaments en un futur pròxim.

La Llei d'avaluació ambiental, inclosos els annexos, es dicta a l'empara de l'article 149.1r.23 CE i, tret d'algunes excepcions que estableix la disposició final vuitena, té el caràcter de legislació bàsica de protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes addicionals de protecció.

En principi, això ja és així en l'actual normativa reguladora de l'avaluació ambiental estratègica i de l'avaluació d'impacte ambiental. La novetat està ara tant en el grau més

gran de detall de la legislació bàsica estatal a l'hora de regular determinades qüestions —per exemple, l'avaluació d'impacte ambiental de projectes— com en la clara voluntat subjacent d'homogeneïtzar la normativa en aquesta matèria en tot el territori nacional, d'harmonitzar els procediments administratius autonòmics actualment en vigor i evitar diferències injustificades en els nivells d'exigència mediambiental de les comunitats autònomes. Si fins ara les diferències entre les regulacions autonòmiques de l'avaluació ambiental han estat grans, la pretensió —i així es fa constar en l'exposició de motius, que fins i tot apel·la a la necessitat d'una coordinació vertical efectiva entre els diferents nivells de govern— és que en el futur hi hagi un marc jurídic comú i una legislació homogènia en tot el territori nacional, amb les especificitats estrictament necessàries en cada comunitat autònoma, per evitar així processos de deslocalització.

En aquest context cal situar els principis de “racionalització, simplificació i concertació dels procediments d'avaluació ambiental” i de “cooperació i coordinació entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes”, que recull la llei, i el paper encomanat a la Conferència Sectorial de Medi Ambient, a la qual correspon analitzar i proposar les modificacions normatives necessàries per complir amb els principis que recull aquesta norma i establir un procediment d'avaluació ambiental homogeni en tot el territori nacional. Per tant, el marge d'actuació de les comunitats autònomes per regular aquesta matèria ha de ser més petit.

comunitats autònomes que tenen legislació pròpia d'avaluació ambiental, la llei incorpora un nou sistema d'entrada en vigor. D'acord amb la disposició derogatòria, la derogació de l'actual legislació bàsica estatal s'ha de dur a terme, en tot cas, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la present llei. No obstant això, si abans que s'exhaureixi aquest termini, les comunitats autònomes aproven nous textos normatius adaptats a aquesta llei, la derogació ha de tenir lloc en el moment en què les noves normes autonòmiques entrin en vigor.

La Llei d'avaluació ambiental s'estructura en tres títols (I —“Principis i disposicions generals”—, II —“Avaluació ambiental”— i III —“Seguiment i règim sancionador”—), integrats per 64 articles; 15 disposicions addicionals, 2 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria única i 10 disposicions finals; i 6 annexos (dedicats respectivament als projectes sotmesos a avaluació ambiental ordinària, els projectes sotmesos a avaluació ambiental simplificada, els criteris per determinar si un projecte de l'annex II ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental ordinària, el contingut de

l'estudi ambiental estratègic, els criteris per determinar si un pla o programa ha de sotmetre's a avaluació ambiental estratègica ordinària i l'estudi d'impacte ambiental i criteris tècnics).

La finalitat principal és establir "les bases que ha de regir l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient, garantint en tot el territori de l'Estat un elevat nivell de protecció ambiental, a fi de promoure un desenvolupament sostenible". Així mateix, recull els principis que informaran el procediment d'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient i el règim de cooperació entre l'Administració estatal i les comunitats autònomes a través de la Conferència Sectorial de Medi Ambient (art. 1).

En relació amb el contingut, el més destacable és, d'una banda, com ja hem avançat, la regulació en el mateix text normatiu de l'avaluació ambiental estratègica i l'avaluació d'impacte ambiental de projectes; i, d'una altra, la introducció d'importantes novetats procedimentals, destinades a guanyar més simplificació i agilització de la tramitació dels procediments d'avaluació, sense oblidar la incorporació de noves tipologies de projectes (per exemple, els projectes consistents en la realització de perforacions per a l'exploració, investigació o explotació d'hidrocarburs que requereixin la utilització de tècniques de fracturació hidràulica o *fracking*).

La Llei d'avaluació ambiental incorpora algunes novetats importants. Vist l'objecte d'aquesta crònica, no pretenem elaborar una anàlisi detallada de la llei, sinó únicament destacar alguns aspectes del contingut. En primer lloc, la llei regula de forma exhaustiva els procediments d'avaluació ambiental estratègica i d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, i estableix un esquema semblant per a ambdós procediments unificant la terminologia utilitzada. Com a novetat, es dissenyen per a ambdós tipus d'avaluació dos procediments (l'ordinari i el simplificat). Existeixen, en conseqüència, procediments d'avaluació ambiental estratègica ordinària i simplificada; i procediments d'avaluació d'impacte ambiental ordinària i simplificada. Es pretén, d'aquesta manera, simplificar els procediments i agilitzar el procés d'avaluació per a determinats plans, programes i projectes.

En segon lloc, entre les novetats més significatives, la llei estableix terminis màxims per als procediments, i se'n redueix considerablement la durada. En tot cas, caldrà veure si realment aquests terminis són de factible compliment a la pràctica i si no repercutiran

negativament en la qualitat i en el rigor dels procediments i pronunciaments ambientals que s'emeten. Així mateix, són molts els canvis que s'introdueixen en determinats tràmits del procediment (per citar només alguns exemples, la inclusió tant en l'avaluació ambiental estratègica com en l'avaluació d'impacte ambiental d'un tràmit d'inadmissió de caràcter substantiu, amb la finalitat que els promotors coneguin en fases preliminars del procediment que existeixen raons fonamentades per entendre que el pla, programa o projecte no podrà comptar amb un pronunciament ambiental favorable; la configuració amb caràcter potestatiu del tràmit previ per a determinar l'abast de l'estudi d'impacte ambiental; o l'extensió del tràmit de consulta per a l'elaboració del document d'abast de l'estudi d'impacte ambiental no només a les administracions públiques afectades sinó també a les persones interessades).

En tercer lloc, la llei, recollint la jurisprudència, defineix, per primera vegada, la naturalesa jurídica d'"avaluació ambiental" i la qualifica com a "procediment administratiu instrumental respecte del d'aprovació o d'adopció de plans i programes, i respecte del d'autorització de projectes o, si escau, respecte de l'activitat administrativa de control dels projectes sotmesos a declaració responsable o comunicació prèvia, a través del qual s'analitzen els possibles efectes significatius sobre el medi ambient dels plans, programes i projectes" (art. 5.1.a).

Així mateix, determina que la naturalesa jurídica de la declaració ambiental estratègica, l'informe ambiental estratègic, la declaració d'impacte ambiental i l'informe d'impacte ambiental és de la d'informe preceptiu i determinant; i explica que contra aquests pronunciaments ambientals no procedirà cap recurs, sense perjudici que, si escau, procedeixin en via judicial enfront de la disposició de caràcter general que hagués aprovat el pla o programa, o bé, dels que procedeixin en via administrativa o judicial davant de l'acte, si escau, d'adopció o aprovació del pla o programa o d'autorització del projecte. D'aquesta manera, la norma recull la consolidada jurisprudència del Tribunal Suprem que impedia la impugnació directa de la declaració d'impacte ambiental. Ha de valorar-se positivament que, en canvi, es permeti la interposició dels recursos que procedeixin en via administrativa o judicial contra la declaració d'impacte ambiental i l'informe d'impacte ambiental, en els casos en què els projectes subjectes a avaluació no requereixin l'autorització, sinó la comunicació prèvia o la declaració responsable. En aquests supòsits sí que ha d'admetre's la impugnabilitat d'aquests pronunciaments

ambientals, en la mesura que deixen de ser un mer acte de tràmit i posen fi al procediment d'avaluació, que es converteix en un procediment autònom i decisor.

En quart lloc, la Llei d'avaluació ambiental també inclou algunes previsions entorn de la capacitat tècnica i responsabilitat de l'autor dels estudis i documents ambientals. Concretament, exigeix que els documents que presentin els promotors en els procediments d'avaluació ambiental estratègica i d'avaluació d'impacte ambiental siguin elaborats per persones amb capacitat tècnica suficient de conformitat amb les normes sobre qualificacions professionals i d'educació superior i que tinguin la qualitat necessària per complir les exigències d'aquesta norma. Per això, els estudis i documents ambientals esmentats han d'identificar l'autor o els autors, i han d'indicar-ne la titulació i, si escau, la professió regulada, també han d'anar signats per l'autor, i han de fer constar la data de conclusió. Es preveu, a més, que els autors d'aquests documents siguin responsables del contingut i de la fiabilitat de la informació, excepte pel que fa a les dades rebudes de l'Administració de forma fefaent. Amb aquestes previsions es tapa un buit en la legislació vigent, atesa la necessitat d'introduir més rigor i de garantir la qualitat dels equips que redacten aquests estudis i documents ambientals, si bé la llei encara podria haver anat més enllà en aquesta matèria, com han fet algunes legislacions autonòmiques.

En cinquè lloc, una altra de les novetats introduïdes que mereix valoració positiva és la introducció de l'obligació de considerar el canvi climàtic en els procediments d'avaluació ambiental. Per exemple, els efectes dels projectes sobre el canvi climàtic s'inclouen ara com a contingut mínim dels estudis d'impacte ambiental; i també cal que l'òrgan ambiental consideri el canvi climàtic quan realitzi l'anàlisi tècnica de l'expedient d'impacte ambiental, avaluant els efectes ambientals del projecte.

Finalment, una altra de les novetats més controvertides de la llei és la creació de bancs de conservació de la naturalesa (disposició addicional vuitena), que constitueixen un instrument de caràcter voluntari que permet compensar, reparar o restaurar la pèrdua de valors naturals que es genera com a conseqüència de l'execució de projectes amb impactes ambientals. Els bancs de conservació de la naturalesa són un conjunt de títols ambientals o crèdits de conservació que atorga el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i, si escau, les comunitats autònomes, que representen valors naturals creats o millorats específicament. Els titulars dels terrenys afectats pels bancs han de conservar els valors naturals creats o millorats, i aquests terrenys han de destinar-se a

usos compatibles amb els valors naturals, d'acord amb el que disposa la resolució de creació de cada banc. Els crèdits generats en aquests bancs s'han d'inscriure en un registre públic dependent del Ministeri i es poden transmetre en règim de lliure mercat i poden constituir les mesures compensatòries o complementàries previstes en la legislació d'avaluació ambiental, responsabilitat mediambiental o sobre patrimoni natural i biodiversitat. La creació d'aquests bancs de la naturalesa, el règim general, organització, funcionament i criteris tècnics dels quals es remet al desplegament reglamentari, suposa la introducció d'un instrument de mercat en el règim d'avaluació ambiental. Aquest mecanisme, emprat en altres països, ha suscitat, no obstant això, la reacció i les crítiques de les associacions ecologistes.

1.2. La reordenació de les competències ambientals dels ens locals després de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local

L'aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local —d'ara endavant, LRSAL—, que modifica l'LBRL, també ha de destacar-se en el marc d'aquesta crònica per les implicacions sobre les competències ambientals de les administracions locals.

Aquesta llei té com a objecte escometre una revisió profunda del règim jurídic aplicable a les entitats locals, a través de la modificació de nombrosos preceptes i disposicions —i de la introducció d'altres de nous— de l'LBRL i del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquesta reforma, que enllaça directament amb el principi d'estabilitat pressupostària consagrat per l'article 135 de la CE —en la nova redacció del 2011—, té com a fi últim aconseguir la racionalització de l'Administració local i garantir-ne la sostenibilitat financera. L'LRSAL es troba estretament vinculada a les exigències derivades de l'article 135 de la CE, que consagra l'estabilitat pressupostària com a principi rector que ha de presidir les actuacions de totes les administracions públiques i, per tant, també les locals; i de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que exigeix noves adaptacions de la normativa bàsica pel que fa a l'Administració local per a l'adequada aplicació dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera o eficiència en l'ús dels recursos públics locals. Els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera es revelen com l'eix

central entorn del qual s'estructura l'LRSA, impregnant-ne el contingut i inspirant la quasi totalitat de les mesures que s'hi inclouen.

En aquest context, un dels objectius bàsics de la reforma és clarificar les competències municipals, per la qual cosa l'LRSA les reordena (i també les redueix), a través de la modificació dels articles 7, 25, 26 i 27 de l'LBRL i la supressió de l'article 28, a fi d'evitar problemes de solapaments competencials entre administracions existents fins ara.

A. Les competències dels municipis

El nou model de delimitació competencial que estableix l'LRSA afecta significativament les competències dels municipis sobre medi ambient, que són objecte de redefinició. En primer lloc, en relació amb les competències pròpies dels municipis, l'article 25.2 de l'LBRL continua incloent entre les competències pròpies dels municipis el medi ambient. No obstant això, les novetats que s'introdueixen en aquest àmbit són diverses. Si bé anteriorment es recollia com a competència pròpia dels municipis la protecció del medi ambient, després de l'LRSA, l'article 25.2 de l'LBRL fa referència ara, de forma més concreta, al “medi ambient urbà” [art. 25.2.b)] i detalla els àmbits d'intervenció que, en particular, s'inclouen en aquest concepte: parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans (abans “recollida i tractament de residus”) i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes. Crida l'atenció la inclusió, dins de “medi ambient urbà”, com a competència de caràcter més específic, de la protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica, que abans no apareixia. També s'inclouen entre les matèries sobre les quals els municipis han d'exercir competències pròpies “l'abastiment d'aigua potable a domicili i l'evacuació i tractament d'aigües residuals” (abans “subministrament d'aigua”) [art. 25.2.c)].

D'altra banda, continuen incloent-se en la llista de matèries de l'article 25.2, encara que amb matisos en la redacció utilitzada, generalment per introduir més precisió, altres matèries directament o indirectament relacionades amb la protecció del medi ambient i amb enormes implicacions [urbanisme —art. 25.2.a)—; protecció civil, prevenció i extinció d'incendis —art. 25.2.f)—; trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat; i protecció de la salubritat pública —art. 25.2.j)—]. I matèries que si bé en aparença no són ambientals o guarden a priori poca relació amb el medi ambient, tenen un important

contingut ambiental [és el cas, per exemple, del transport col·lectiu urbà —art. 25.2.g)— o de la informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local —art. 25.2.h)—].

A pesar del reconeixement del medi ambient urbà, de l'abastiment d'aigua potable a domicili i de l'evacuació i tractament d'aigües residuals —i d'aquestes altres matèries— com a competència pròpia dels municipis, l'LBRL no atribueix directament competències als municipis, sinó que és la legislació sectorial la que ha de concretar les competències municipals en aquests àmbits. Així es deriva del mateix article 25.2 de l'LBRL en preveure que els municipis han d'exercir aquestes competències “en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes”. A més, ara l'atribució competencial ha de respondre a la prèvia avaluació de la conveniència de la implantació de serveis locals que es tracti d'acord amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera. Per tant, les matèries de l'article 25 de l'LBRL continuen sent indicatives, i la determinació de les competències dels ens locals continua sent una qüestió reservada a la llei sectorial —estatal o autonòmica—, si bé ara també es tindran en compte elements econòmics per determinar les competències i els serveis públics que han de prestar els municipis. Com a novetat, la concreció per llei de les competències municipals enumerades en el nou article 25.2 de l'LBRL se sotmet ara al compliment de requisits estrictes. El nou apartat 4 de l'article 25 de l'LBRL exigeix, en primer lloc, que a la llei s'adjunti una memòria econòmica que reflecteixi l'impacte sobre els recursos financers de les administracions públiques afectades i el compliment dels principis d'estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència del servei o l'activitat. En segon lloc, que prevegi la dotació dels recursos necessaris per assegurar la suficiència financera de les entitats locals. I, finalment, que l'atribució competencial determinada per llei no comporti, en cap cas, una despesa més gran de les administracions públiques. En conseqüència, no sols s'exigeix, com ja succeïa anteriorment, que una llei determini les competències municipals específiques en les matèries enunciades en l'article 25.2, sinó que, a més, ara, cal la seva valoració econòmica i l'aportació de recursos per a les competències que es reconeguin. En efecte, no serà possible el reconeixement de competències en una determinada matèria si no es garanteix la suficiència financera de les entitats locals o si implica una despesa més gran per a les administracions públiques. Finalment, com a últim requisit que s'imposa al legislador, el nou apartat 5 de l'article 25 de l'LBRL exigeix que la llei determini la competència municipal pròpia de què es

tracti, garantint que no es produeix cap atribució simultània de la mateixa competència a una altra Administració pública. Es pretén, d'aquesta manera, evitar duplicitats administratives.

En segon lloc, quant als serveis mínims obligatoris, continuen concretant-se en l'article 26 de l'LBRL —també modificat per l'LRSAL—, que detalla una sèrie de serveis que, de forma obligatòria, han de prestar els municipis. A diferència de l'article 25 de l'LBRL, que no conté cap habilitació competencial expressa en la mesura que les matèries que enumera com a competències pròpies necessiten ulterior concreció pel legislador estatal o autonòmic, l'article 26 realitza una habilitació específica als municipis per a la prestació de determinats serveis en diferents àmbits d'actuació. Es tracta de serveis mínims obligatoris que han d'assegurar tots els municipis —en funció del nombre d'habitants—, amb independència de la seva ubicació i que han d'arribar a tots els ciutadans. Ara ja no es preveu que aquests serveis puguin prestar-los els municipis “en si o associats”, i aquest incís ha desaparegut de l'apartat 1 de l'article 26.

Entre aquests serveis mínims de prestació obligatòria, recollits en l'article 26.1 de l'LBRL, continuen incloent-se alguns serveis ambientals. Tots els municipis han de prestar els serveis de recollida de residus, neteja viària, abastiment domiciliari d'aigua potable i clavegueram. Els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més, el de tractament de residus. Els de més de 20.000 habitants, a més, els de protecció civil i prevenció i extinció d'incendis. Fins aquí i pel que fa als serveis ambientals, no hi ha cap novetat en relació amb les previsions que conté l'article 26.1 de l'LBRL amb anterioritat a la seva reforma per l'LRSAL. La novetat en aquest àmbit està en la configuració del medi ambient urbà com a servei obligatori per als municipis amb població superior a 50.000 habitants. Per a aquests municipis ja no es configura com a servei municipal de prestació obligatòria el de protecció del medi ambient, sinó el de medi ambient urbà, que és més limitat. No es concreta, no obstant això, què s'inclou dins d'aquest servei de medi ambient urbà, cosa que hauria estat desitjable.

La novetat més important que recull el nou article 26 de l'LBRL quant a la prestació dels serveis municipis obligatoris és la previsió que en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants —més del 95 % dels municipis— és la Diputació Provincial o entitat equivalent la que coordina la prestació de determinats serveis: recollida i tractament de residus, abastiment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals, neteja viària, accés als nuclis de població, pavimentació de vies

urbanes i enllumenat públic. Com pot comprovar-se, tres dels sis serveis la coordinació de la prestació dels quals s'atribueix a les diputacions provincials són ambientals. Es tracta, a més, de serveis obligatoris que generen grans costos.

En tercer lloc, el ventall competencial dels municipis pel que fa al medi ambient ha de completar-se amb les competències que puguin exercir en aquest àmbit per delegació. L'article 27 de l'LBRL també ha estat modificat per l'LRSAL i s'ha fet ressò dels paràmetres d'eficiència i equilibri financers de les entitats locals, omnipresents en l'LRSAL. En la nova redacció, aquest precepte també preveu, en l'apartat primer, que l'Estat i les comunitats autònomes —no esmenta, no obstant això, altres entitats locals—, en l'exercici de les seves competències respectives, poden delegar en els municipis l'exercici de les seves competències.

En l'actualitat Actualment, específicament es preveu la possibilitat de delegar determinades competències ambientals. El nou apartat 3 de l'article 27 de l'LBRL, amb l'objecte d'evitar duplicitats administratives, millorar la transparència dels serveis públics i el servei a la ciutadania i, en general, contribuir als processos de racionalització administrativa, generant un estalvi net de recursos, habilita l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes a delegar —no concreta si només en els municipis o també en altres ens locals—, seguint criteris homogenis, entre altres, les competències de “vigilància i control de la contaminació ambiental” [apartat a)], “protecció del medi natural” [apartat b)], “inspecció i sanció d'establiments i activitats comercials” [apartat i)] i “comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics” [apartat k)]. Això no obsta perquè puguin ser objecte de delegació altres competències ambientals, ja que l'enumeració que conté l'article 27.3 és merament exemplificativa. De totes maneres, en algunes de les matèries ambientals que es recullen com a susceptibles de delegació, els municipis disposen d'acord amb la legislació sectorial autonòmica d'algunes competències. És el cas, per exemple, de l'àmbit de la “vigilància i control de la contaminació ambiental”. Això planteja l'articulació entre les previsions de la legislació de règim local i la legislació sectorial ambiental, qüestió que excedeix amb escreix l'objecte d'aquesta crònica.

La delegació també se sotmet ara a requisits més estrictes. En primer lloc, ha de millorar l'eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i estar d'acord amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (art. 25.1 LBRL). Tanmateix, no s'exigeix que abasti una participació ciutadana més gran com

feia en la seva redacció anterior l'apartat primer de l'article 25 de l'LBRL. En segon lloc, n'ha de determinar l'abast, el contingut, les condicions i la duració, la qual no podrà ser inferior a cinc anys, i el control d'eficiència que es reservi l'Administració delegatòria i els mitjans personals, materials i econòmics, que assigni, sense que pugui comportar una despesa més gran de les administracions públiques (art. 25.1 LBRL). En tercer lloc, cal adjuntar una memòria econòmica en què es valori l'impacte la despesa de les administracions públiques afectades sense que, en cap cas, pugui comportar-ne una despesa més gran (art. 25.1. LBRL). En quart lloc, ha d'anar amb el corresponent finançament, per la qual cosa cal la dotació pressupostària adequada i suficient en els pressupostos de l'Administració delegatòria per a cada exercici econòmic, i és nul·la sense la dita dotació. A més, en cas d'incompliment de les obligacions financeres per part de l'Administració autonòmica delegatòria, es faculta l'entitat local delegada per compensar-les automàticament amb altres obligacions financeres que aquesta tingui amb l'altra (art. 27.6 LBRL). A més, es preveu entre les causes de renúncia de la delegació l'incompliment de les obligacions financeres per part de l'Administració delegatòria. També és causa de renúncia si, per circumstàncies sobrevingudes, es justifica prou la impossibilitat del seu exercici per l'Administració en què han estat delegades sense detriment de l'exercici de les competències pròpies (art. 27.7 LBRL). En cinquè lloc, ha de requerir sempre, per a la seva efectivitat, l'acceptació pel municipi interessat, ja que no es preveu com feia en la redacció anterior l'article 27.4 de l'LBRL, la seva imposició obligatòriament per llei (art. 27.5 LBRL).

En quart lloc, l'LRSAL limita en gran manera l'exercici per part de les entitats locals de competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, conegudes habitualment com a "competències impròpies". D'acord amb el nou apartat 4 de l'article 7 de l'LBRL, els municipis únicament poden exercir aquestes competències quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de l'hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del servei públic amb una altra Administració pública. A aquests efectes, són necessaris i vinculants els informes previs de l'Administració competent per raó de la matèria, en què s'assenyali la inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. En tot cas, l'exercici d'aquestes competències s'ha de dur a terme en els termes que preveu la legislació de

l'Estat i de les comunitats autònomes. Amb aquesta regulació es pretén, tal com posa de manifest el preàmbul de l'LRSA, que les entitats locals no tornin a assumir competències que no els atribueix la llei i per a les quals no tinguin finançament adequat. Com a correlat de la limitació i excepcionalitat amb què es configuren ara les competències impròpies, l'LRSA també ha suprimit el contingut de l'article 28 de l'LBRL, que contenia una clàusula de competències complementàries. D'aquesta manera, s'elimina la possibilitat, anteriorment recollida en aquest precepte, que els municipis puguin realitzar activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les relatives a l'educació, la cultura, la promoció de la dona, l'habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient. Això no implica, no obstant això, que els municipis estiguin obligats a deixar d'intervenir en aquestes matèries, sinó que la seva intervenció ha d'enquadrar-se, segons els casos, en algunes de les categories competencials ja analitzades (competències pròpies —és el cas, per exemple, de la protecció del medi ambient, ja que el “medi ambient urbà” es preveu com a competència pròpia, amb l'abast concret que les lleis determinen en cada cas—, competències delegades o competències impròpies).

B. Les competències de les províncies

La L'LRSA reforça les diputacions provincials, tant en les funcions tradicionals de cooperació i assistència com en el seu nou paper com a prestadora de serveis i en les funcions de supervisió i tutela sobre els municipis. Des de la perspectiva ambiental, els aspectes més destacables són dos. D'una banda, l'assumpció per part de les diputacions provincials de la prestació dels serveis de tractament de residus en els municipis de menys de 5.000 habitants. L'article 36.1 de l'LBRL configura ara com a competència pròpia de les diputacions provincials —o entitats equivalents— la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si escau, supracomarcal i el foment o, si escau, la coordinació de la prestació unificada de serveis dels municipis del seu respectiu àmbit territorial; i, en particular l'assumpció de “la prestació dels serveis de tractament de residus en els municipis de menys de 5.000 habitants, i de prevenció i extinció d'incendis en els de menys de 20.000 habitants, si no procedeixen a la seva prestació” [apartat c)].

d'Un altreD'altra banda, com hem avançat, s'atribueix a les diputacions provincials la coordinació de la prestació de determinats serveis obligatoris en els municipis de menys

de 20.000 habitants, entre els quals es troben els de recollida i tractament de residus, abastiment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals i neteja viària. Per coordinar la prestació d'aquests serveis, el nou apartat 2 de l'article 26 de l'LBRL preveu que la Diputació ha de proposar, amb la conformitat dels municipis afectats, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la forma de prestació, consistent en la prestació directa per la Diputació o la implantació de fórmules de gestió compartida a través de consorcis, mancomunitats o altres fórmules. La decisió sobre la forma de prestació dels esmentats serveis obligatoris correspon, per tant, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Per reduir els costos dels serveis, ha de decidir sobre la proposta formulada, que ha de tenir l'informe preceptiu de la comunitat autònoma si és l'Administració que exerceix la tutela financera. Quan és la Diputació — o entitat equivalent— qui assumeix la prestació d'aquests serveis, el cost efectiu del servei repercuteix als municipis en funció de l'ús. Si aquests serveis estan finançats per taxes i n'assumeix la prestació, la taxa per finançar els serveis es destina a la Diputació. L'article 26.2 de l'LBRL també preveu la possibilitat que els municipis assumeixin la prestació i coordinació d'aquests serveis. Per això, cal que justifiquin davant de la Diputació que poden prestar aquests serveis amb un cost efectiu menor que el derivat de la forma de gestió proposada per la Diputació provincial o entitat equivalent. Si la Diputació ho considera acreditat, els municipis poden retenir la prestació i coordinació d'aquests serveis.

Aquestes previsions han de completar-se amb el nou article 116 ter de l'LBRL, introduït per l'LRSA. De conformitat amb aquest precepte, totes les entitats locals han de calcular abans de l'1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades que conté la liquidació del pressupost general i, si escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents, corresponent a l'exercici immediat inferior. El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte tots els costos reals directes i indirectes, encara que es remet a l'ordre del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques desplegament d'aquests criteris de càlcul. En tot cas, totes les entitats locals han de comunicar a aquest ministeri, perquè es publiquin, els costos efectius de cadascun dels serveis. Es tracta d'una mesura de transparència que el preàmbul de l'LRSA considera "un pas fonamental en la millora de la informació disponible, eliminant asimetries, per a la presa de decisions dels ciutadans i de l'Administració, i contribuirà de forma permanent a l'augment de l'eficiència". A més,

amb la publicació de la informació de tots els costos efectius dels serveis prestats per totes les entitats locals, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques contribueix a garantir el compliment del principi d'eficiència, de conformitat amb l'article 7 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. diputacions o entitats equivalents correspon el seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de la seva província. Si detecta que aquests costos són superiors als dels serveis coordinats o prestats, ha d'oferir als municipis col·laboració per a una gestió coordinada més eficient dels serveis que permeti reduir aquests costos [art. 36.1.h) LBRL].

C. L'excepcionalitat del règim de llicència en l'àmbit local: la protecció del medi ambient com a excepció

La L'LRSAI també introdueix alguns canvis en relació amb la intervenció administrativa local que són rellevants des de la perspectiva de la protecció del medi ambient. Concretament, modifica l'article 84 bis de l'LBRL, que havia estat introduït per la Llei 3/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, a fi d'aprofundir en la línia de simplificació administrativa ja avançada amb la transposició de la directiva de serveis en el mercat interior i de frenar la utilització de les llicències municipals. En l'actual redacció, l'article 84 bis manté l'excepcionalitat del règim de llicència en l'àmbit local i només en permet l'establiment en casos excepcionals en què se n'acrediti la necessitat i proporcionalitat. Amb caràcter general, l'exercici d'activitats no s'ha de sotmetre a l'obtenció de llicència o un altre mitjà de control preventiu. No obstant això, pot exigir-se la llicència o un altre mitjà de control preventiu respecte a les activitats econòmiques en els dos supòsits següents:

-Quan estigui justificat per raons d'orde públic, seguretat pública, salut pública o protecció del medi ambient en el lloc concret on es realitzi l'activitat, i aquestes raons no puguin salvaguardar-se mitjançant la presentació d'una declaració responsable o d'una comunicació. D'aquesta manera, la protecció del medi ambient continua recollint-se com a excepció que permet justificar el manteniment de règims de llicència. Ara bé, no n'hi ha prou que concorrin raons de protecció ambiental per sotmetre l'exercici d'una activitat a llicència, sinó que cal, a més, que aquesta sigui la mesura més adequada per assolir l'objectiu pretès, que no quedaria salvaguardat mitjançant la

presentació d'una declaració responsable o d'una comunicació. Cal, per tant, que la necessitat i la proporcionalitat quedin clarament justificades.

-Quan per l'escassetat de recursos naturals, la utilització de domini públic, l'existència d'inequívocs impediments tècnics o en funció de l'existència de serveis públics sotmesos a tarifes regulades, el nombre d'operadors del mercat sigui limitat.

La L'LRSA també pretén afavorir la iniciativa econòmica privada, i evitar, amb caràcter general, que els municipis sotmetin a autorització municipal les instal·lacions o infraestructures físiques necessàries per iniciar una activitat econòmica. En efecte, l'article 84 bis, en l'apartat 2, estableix que aquestes instal·lacions o infraestructures només s'han de sotmetre al règim d'autorització quan ho estableixi una llei que defineixi el seus requisits essencials i aquestes infraestructures siguin susceptibles de generar danys al medi ambient i l'entorn urbà, la seguretat o la salut públiques i el patrimoni històric i resulti proporcionat. L'avaluació d'aquest risc s'ha de determinar en funció de les característiques de les instal·lacions, entre les quals hi ha: la potència elèctrica o energètica de la instal·lació, la seva capacitat o aforament, la contaminació acústica, la composició de les aigües residuals que emeti la instal·lació i la seva capacitat de depuració, l'existència de materials inflamables o contaminants i les instal·lacions que afectin béns declarats integrants del patrimoni històric.

D'altra banda, en cas d'existència de llicències o autoritzacions concurrents entre una entitat local i una altra Administració, l'entitat local ha de motivar expressament en la justificació de la necessitat de l'autorització o llicència l'interès general concret que es pretén protegir i que aquest no es troba cobert mitjançant una altra autorització ja existent. D'aquesta manera, es pretén evitar el sotmetiment a llicència local d'activitats que ja tenen l'autorització d'altres administracions. En aquests casos, per poder mantenir la llicència local, l'ens local ha de justificar la seva necessitat i proporcionalitat.

1.3. Algunes lleis no ambientals d'interès des del punt de vista ambiental

Encara que Tot i no es tracta de lleis l'objecte de les quals és la protecció del medi ambient, ens referirem breument a alguns aspectes de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, d'interès en aquest àmbit.

A. La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern: el seu impacte sobre l'accés a la informació ambiental

L'accés a la informació ambiental a Espanya presenta una regulació específica des del 1995, ara recollida en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, la participació pública i l'accés a la justícia sobre medi ambient.

Recentment, s'ha aprovat la primera llei espanyola de transparència: la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Això ha suposat un avenç significatiu, ja que Espanya era un dels pocs països europeus que no tenia cap norma d'aquest tipus. Es tracta d'una iniciativa de gran importància política i jurídica, atesa la necessitat de transparència de les actuacions públiques. El seu objecte és ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, que s'articula a través d'obligacions de publicitat activa per a totes les administracions i entitats públiques; reconèixer i garantir el dret d'accés a la informació relativa a l'activitat, regulat com un dret d'ampli àmbit subjectiu i objectiu; i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics i també les conseqüències derivades del seu incompliment, la qual cosa es converteix en un exigència de responsabilitat per a tots els que exerceixen activitats de rellevància pública. Amb l'aprovació d'aquesta llei es cobreix una llacuna legal existent a Espanya, ja que tot i que existien normes sectorials que contenien obligacions de difusió i d'accés a la informació (per exemple, en matèria de contractes, subvencions, pressupostos o activitats d'alts càrrecs) i fins i tot una llei específica per regular l'accés a la informació sobre medi ambient, faltava la regulació general del dret d'accés i publicitat de la informació.

L'aprovació de la Llei 19/2013 obliga a plantejar com afectarà l'àmbit de l'accés a la informació ambiental, que ja presenta legislació específica des del 1995. Aquesta qüestió s'aborda a la disposició addicional primera la llei, l'apartat segon de la qual preveu que les matèries que tinguin previst un règim jurídic específic d'accés a la informació —és el cas del medi ambient— s'han de regir per la seva normativa específica i, amb caràcter supletori, per aquesta llei. Per tant, s'ha d'aplicar preferentment la Llei 27/2006, d'accés a la informació ambiental.

No obstant això, en aquesta mateixa disposició addicional, en l'apartat tercer, s'estableix que “aquesta Llei ha de ser aplicable, en el que no preveuen les seves respectives

normes reguladores, a l'accés a la informació ambiental, a la destinada a la reutilització i a la que es troba en els arxius que no tinguin la consideració d'arxius d'oficina o gestió". D'aquesta manera, d'acord amb el que estableix aquest apartat tercer, en tot el que no preveu la legislació d'accés a la informació, és aplicable la Llei 19/2013. I això planteja algunes qüestions interessants de les quals en destaquem especialment dos. D'una banda, el règim del silenci administratiu si transcorre el termini màxim per resoldre sense que s'hagi dictat ni notificat cap resolució expressa. En relació amb aquesta qüestió, la Llei 27/2006 no conté cap referència al silenci administratiu, per la qual cosa, per aplicació de la regulació general de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, fins ara s'entenia que s'aplicava la regla general del silenci positiu determinada per l'article 43.2, en la mesura que no hi havia una norma amb rang de llei per raons imperioses d'interès general o una norma de dret comunitari europeu que estableixi el contrari ni concorrien les excepcions establertes per aquest precepte. No obstant això, ara la Llei 19/2013, que —recordem—, d'acord amb l'apartat tercer de la disposició addicional primera "és aplicable, en el que no preveuen les seves respectives normes reguladores, a l'accés a la informació ambiental", preveu un règim de silenci administratiu negatiu (d'acord amb el seu art. 20.5, "transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa s'entendrà que la sol·licitud ha sigut desestimada").

D'altra banda, en la mesura que la Llei 19/2013 crea una reclamació específica, substitutiva dels recursos administratius, enfront de tota resolució expressa o presumpta pel que fa a l'accés davant del Consell de Transparència i Bon Govern —organisme públic dels previstos en la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat—, amb caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa administrativa, es planteja si aquesta reclamació també seria aplicable en l'àmbit de l'accés a la informació ambiental. Segons la nostra opinió, sí²⁹.

²⁹ Així s'ha pronunciat també en la doctrina administrativista, FERNÁNDEZ RAMOS, S., "El acceso a la información en el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno", en BERMEJO LATRE, J. L. i CASTEL GAYÁN, S., *Transparencia, participación ciudadana y Administración pública en el siglo XXI*, Monografía de la Revista Aragonesa de Administración Pública, XIV, Saragossa, 2013, p. 239.

B. La Llei de garantia de la unitat de mercat: la protecció del medi ambient com a excepció que justifica l'exigència d'autorització

Al desembre de 2013 també ha vist la llum la Llei 20/2013, de garantia de la unitat de mercat, dictada amb la finalitat d'establir les disposicions necessàries per fer efectiva la unitat de mercat en tot el territori nacional. Es tracta, en definitiva, d'una llei l'objectiu general de la qual és introduir “un marc regulador eficient per a les activitats econòmiques”³⁰. La llei es recolza principalment en el principi d'unitat de mercat que recull l'article 139 de la CE “per imposar una nova regulació de les condicions d'accés a les activitats econòmiques i al seu exercici, nova regulació que pretén corregir la realitat d'un mercat excessivament fragmentat des del punt de vista normatiu”³¹. Amb aquesta finalitat, introdueix una sèrie de mesures de supressió de barreres administratives i d'harmonització normativa³² que pretenen fer front a aquesta fragmentació del mercat nacional, que com posa de manifest el preàmbul, “dificulta la competència efectiva i impedeix aprofitar les economies d'escala que ofereix operar en un mercat de més dimensions, la qual cosa desincentiva la inversió i, en definitiva, redueix la productivitat, la competitivitat, el creixement econòmic i l'ocupació, amb l'important cost econòmic que suposa en termes de prosperitat, ocupació i benestar del ciutadà”. Entre les quals, destaquem especialment les següents: l'ampliació dels supòsits en què no poden aplicar-se controls previs per a l'accés a les activitats econòmiques i el seu exercici: l'extensió de l'eficàcia a tot el territori nacional de tots els mitjans d'intervenció de les autoritats competents que permetin l'accés a una activitat econòmica o el seu exercici, o acreditin el compliment de certes qualitats, qualificacions o circumstàncies; el foment de la cooperació interadministrativa, i la introducció d'un conjunt de mecanismes de protecció dels operadors econòmics en l'àmbit de la llibertat d'establiment i de la llibertat de circulació.

Als efectes que aquí ens interessen, volem destacar que la protecció del medi ambient es preveu en la Llei de garantia de la unitat de mercat com a excepció que permet l'exigència d'autorització. Efectivament, l'article 17, sota el títol “Instrumentació del principi de necessitat i proporcionalitat” permet l'exigència d'autorització “sempre que concorrin els principis de necessitat i proporcionalitat, que hauran de motivar-se prou en

³⁰TORNOS MAS, J., “La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En particular, el principio de eficacia”, *Revista d'Estudis Autònoms i Federals*, núm. 19, 2014, p. 147.

³¹TORNOS MAS, J., *op. cit.*, p. 147.

³²LOZANO CUTANDA, B., “Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado: las diez reformas clave”, *Gómez-Acebo&Pombo, Noticias Breves*, desembre de 2013, p. 1.

la Llei que estableixi el dit règim”. Es considera que concorren els principis de necessitat i proporcionalitat per a l'exigència d'autorització, respecte als operadors econòmics, quan estigui justificat, entre altres causes, per raons de protecció del medi ambient en el lloc concret on es realitza l'activitat i aquestes raons no puguin salvaguardar-se mitjançant la presentació de la declaració responsable o comunicació; respecte a les instal·lacions o infraestructures físiques necessàries per a l'exercici d'activitats econòmiques, quan siguin susceptibles de generar danys sobre el medi ambient i l'entorn urbà, la seguretat o la salut pública i el patrimoni historicoartístic, i aquestes raons no puguin salvaguardar-se mitjançant la presentació d'una declaració responsable o d'una comunicació; quan per l'escassetat de recursos naturals, la utilització de domini públic, l'existència d'inequívocs impediments tècnics o en funció de l'existència de serveis públics sotmesos a tarifes regulades, el nombre d'operadors econòmics del mercat sigui limitat; i quan així ho disposi la normativa de la Unió Europea o tractats i convenis internacionals, incloent-hi l'aplicació, si escau, del principi de precaució.

D'altra banda, aquesta llei també reforça els mecanismes de cooperació i col·laboració entre les diferents autoritats competents mitjançant l'intercanvi d'informació i, si escau, sol·licituds d'actuació, per evitar perjudicis greus per a la salut o seguretat de les persones o per al medi ambient i facilitar l'adopció de les mesures que resulten necessàries en els terminis més breus possibles (art. 25).

1.4. Novetats en l'àmbit nuclear

En l'àmbit nuclear, s'ha aprovat recentment el Reial decret 102/2014, de 21 de febrer, per a la gestió responsable i segura del combustible nuclear consumit i els residus radioactius. Aquest reial decret, dictat a l'empara del que disposa l'article 149.1.13 i 25 de la Constitució, que atribueixen a l'Estat la competència sobre bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i bases del règim miner i energètic, respectivament, incorpora al dret espanyol la Directiva 2011/70/Euratom del Consell, de 19 de juliol de 2011, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la gestió responsable i segura del combustible nuclear consumit i dels residus radioactius i deroga el Reial decret 1349/2003, de 31 d'octubre, sobre ordenació de les activitats de l'Empresa Nacional de Residus Radioactius, SA (ENRESA), i el seu finançament, i

també totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior que contradiguin o s'oposin al que disposa aquest reial decret.

Constitueix l'objecte d'aquest reial decret la regulació de la gestió responsable i segura del combustible nuclear consumit i dels residus radioactius si procedeixen d'activitats civils, en totes les seves etapes, des de la generació fins a l'emmagatzematge definitiu, a fi d'evitar imposar a les futures generacions càrregues indegudes, i també la regulació d'alguns aspectes relatius al finançament d'aquestes activitats, complint al marc comunitari. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest reial decret els residus de les indústries extractives que puguin tenir contingut radioactiu i estiguin inclosos dins de l'àmbit d'aplicació del Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres, quan no siguin considerats residus radioactius; i les evacuacions al medi ambient autoritzades.

Amb aquesta finalitat, preveu alguns principis generals que cal respectar pel que fa a la gestió de combustible nuclear consumit i residus radioactius i precisa les responsabilitats sobre el combustible nuclear consumit i els residus radioactius. En particular, aquest reial decret, de conformitat amb el que preveu la directiva, compatibilitza l'atribució de la responsabilitat principal o primera respecte d'aquests materials de qui els genera o és titular de la corresponent autorització, amb la responsabilitat última que correspon a l'Estat i que es concreta, entre altres aspectes, en la qualificació —ja explicitada en la Llei 25/1964, de 29 d'abril— de la gestió com a servei públic essencial reservat a l'Estat.

Així mateix, s'estableixen la regulació i el contingut del Pla General de Residus Radioactius, i també alguns aspectes relatius al seu finançament i es regula el comitè de seguiment i control del Fons per al finançament d'activitats del Pla General de Residus Radioactius; l'objecte i funcions d'ENRESA i el control de les seves actuacions i plans; les especificacions tecnicoadministratives d'acceptació; el control de seguretat de la gestió del combustible nuclear consumit i els residus radioactius, i l'emmagatzematge definitiu de residus radioactius fora d'Espanya.

Finalment, també modifica dues normes reglamentàries. En primer lloc, el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, aprovat per Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, a fi d'incorporar una nova autorització de desmantellament i tancament per a les instal·lacions d'emmagatzematge definitiu de combustible nuclear consumit i

residus radioactius, i incloure l'obligació d'aportar garanties proporcionades que cobreixin els costos i contingències que es puguin derivar dels processos de desmantellament i clausura o tancament de les instal·lacions nuclears. Així mateix, s'aclareix que la declaració de cessament d'activitat suposa l'autorització d'explotació en què s'estableixen les condicions a les quals han d'ajustar-se les activitats que s'han de dur a terme en la instal·lació fins que no es disposi de l'autorització de desmantellament, introduint la possibilitat de la renovació rere el dit cessament, quan aquest tancament hagi obeït a raons alienes a les de seguretat nuclear o protecció radiològica.

I, en segon lloc, el Reial decret 243/2009, de 27 de febrer, pel qual es regula la vigilància i el control de trasllats de residus radioactius i combustible nuclear consumit entre estats membres o procedents o amb destinació a l'exterior de la Comunitat, amb l'objecte d'aclarir-ne la redacció.

1.5. Novetats pel que fa al canvi climàtic

En matèria de Pel que fa al canvi climàtic, hem d'esmentar especialment tres normes reglamentàries, dictades a l'empara del que disposa l'article 149.1.13 i 23 de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i sobre legislació bàsica pel que fa a la protecció del medi ambient. En primer lloc, el Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni, l'objecte del qual és la creació del registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni, a fi de contribuir a la reducció en l'àmbit nacional de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, incrementar les absorcions pels embornals de carboni en el territori nacional i facilitar d'aquesta manera el compliment dels compromisos internacionals que assumeix Espanya pel que fa al canvi climàtic. L'objectiu del registre és que les empreses calculin i redueixin la petjada de carboni i que la registrin voluntàriament. Posteriorment, podran compensar-la mitjançant projectes d'absorció o embornals forestals localitzats a Espanya, amb la qual cosa també s'impulsarà la creació de masses forestals que absorbeixin el CO₂. A aquests efectes, el Registre té tres seccions: la primera s'adreça a les empreses que calculin la seva petjada de carboni i que la vulguin registrar oficialment, amb la qual cosa obtindran un segell nacional que ho acrediti; la segona

inclou les empreses i entitats que tinguin projectes forestals a Espanya; i la tercera permetrà connectar les empreses que volen compensar la seva petjada de carboni amb les que tenen els projectes al territori nacional, de manera que aquesta compensació es farà a Espanya, mitjançant embornals forestals.

En segon lloc, donant continuïtat al Pla d'Impuls al Medi Ambient "PIMA Aire" i al Pla "Prima Aire 2", que forma part d'una estratègia més àmplia, dissenyada i posada en marxa pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb l'objectiu de reduir de forma significativa les emissions de contaminants atmosfèrics, principalment partícules, i també les emissions de CO₂ mitjançant la renovació del parc actual de vehicles per models més eficients i de menor impacte ambiental disponibles en el mercat espanyol, s'han aprovat el Reial decret 128/2014, de 28 de febrer, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes del Pla d'Impuls al Medi Ambient "PIMA Aire 3" per a l'adquisició de vehicles comercials, motocicletes i ciclomotors elèctrics i híbrids i bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric; i el Reial decret 147/2014, de 7 de març, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes del Pla d'Impuls al Medi Ambient per a la renovació de tractors agrícoles "PIMA Terra". Amb aquestes normes es pretén continuar amb la línia traçada pel Govern, per consolidar els objectius assolits i continuar avançant en la protecció del medi ambient i, en concret, en la qualitat de l'aire mitjançant la reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics dels vehicles, especialment significatives en les grans ciutats. Tot això, mitjançant la inclusió d'una sèrie de mesures que s'emmarquen dins de les polítiques del Govern de lluita contra el canvi climàtic.

D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat, mitjançant l'Acord de 15 de novembre de 2013, l'assignació final gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a les instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets d'emissió per al període 2013-2020 i per a cada any a cada instal·lació³³.

1.6. Avenços pel que fa a la planificació hidrològica: l'aprovació del Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre

³³BOE núm. 44, de 20 de febrer de 2014.

Encara Tot i que amb molt de retard en relació amb els terminis establerts per la directiva marc d'aigües, continuen els avenços pel que fa a planificació hidrològica. En el període analitzat, s'ha publicat al BOE el Reial decret 129/2014, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre. Amb aquest, ja són catorze els plans hidrològics aprovats. Aquest Pla ha nascut immers en una gran polèmica i ha obert un enfrontament entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya. El punt més conflictiu és el cabal ecològic que ambdós administracions consideren com a llindar mínim. Mentre que la Generalitat reclama uns 7.000 hectòmetres cúbics anuals, el Govern central n'imposa 3.200.

1.7. Novetats pel que fa a la protecció d'animals

Mitjançant el Reial decret 37/2014, de 24 de gener, es regulen aspectes relatius a la protecció d'animals al moment de la matança. Aquesta norma té caràcter bàsic i es dicta a l'empara del que disposen els articles 149.1.13 i 149.1.16 de la Constitució, pels quals s'atribueix a l'Estat la competència exclusiva pel que fa a les bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, i pel que fa a les bases i la coordinació general de la sanitat. L'objectiu és desplegar la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a l'atenció dels animals, en l'explotació, transport, experimentació i sacrifici, establint disposicions específiques aplicables a Espanya del Reglament (CE) núm. 1099/2009, del Consell, de 24 de setembre de 2009, relatiu a la protecció dels animals en el moment de la matança, en relació amb les qüestions següents: quant a la formació de les persones que duen a terme la matança i les operacions que s'hi relacionen; en alguns aspectes quant a la matança d'animals en les explotacions dedicades a la producció d'animals de pelleteria i en les quals es maten pollets de fins a 72 hores o ous embrionats, i també el buidatge sanitari; en els requisits mínims per dur a terme la matança d'emergència fora de l'escorxador i per a consum domèstic privat; i quant a la comercialització a Espanya de productes d'equipament de subjecció i atordiment. Amb aquesta finalitat, recull disposicions generals sobre la competència del personal que du a terme el sacrifici o matança i les operacions que s'hi relacionen; determina els requisits per a la matança en les explotacions dedicades a la producció d'animals de pelleteria i en les explotacions en què es maten pollets de fins a 72 hores o ous embrionats; i inclou algunes previsions sobre el buidatge sanitari, la comercialització de productes d'equipament de subjecció i atordiment, la matança d'emergència fora de l'escorxador i

la matança per a consum domèstic privat, i també sobre infraccions i sancions administratives.

1.8. Altres normes i actuacions d'interès

A més de les normes que hem ressenyat, en el període objecte d'anàlisi podem esmentar altres normes d'interès. Destaquem, des d'una perspectiva internacional l'Instrument d'Acceptació de l'Esmena a l'article XXI de la Convenció sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestre (Washington, 3 de març de 1973), adoptada a Gaborone el 30 d'abril de 1983³⁴; l'Instrument de Ratificació de l'Acord de cooperació per a la protecció de les costes i de les aigües de l'Atlàntic Nord-Est contra la pol·lució, fet a Lisboa el 17 d'octubre de 1990³⁵; i l'Instrument de Ratificació del Protocol Addicional relatiu a l'Acord de cooperació per a la protecció de les costes i de les aigües de l'Atlàntic Nord-Est contra la pol·lució, fet a Lisboa el 20 de maig de 2008³⁶.

Així mateix, s'esmenten algunes normes d'interès en àmbits sectorials diversos. En l'àmbit organitzatiu, cal destacar l'Ordre AAA/2272/2013, de 27 de novembre, que crea la Comissió permanent per a situacions d'adversitat climàtica o mediambiental (COPAC), com a òrgan col·legiat adscrit a la Subsecretaria del Ministeri que té com a objectius prioritaris la centralització, promoció, desplegament, coordinació i seguiment de les mesures adoptades en l'àmbit del sector agrari, pesquer, forestal i mediambiental, en situacions d'adversitat climàtica o mediambiental inesperades i inusitades quant a la seva duració, intensitat o extensió territorial, per assolir la màxima eficàcia en la seva aplicació i la seva adequació a la magnitud dels danys ocasionats. Pel que fa a l'energia, la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret llei 17/2013, de 27 de desembre, pel qual es determina el preu de l'energia elèctrica en els contractes subjectes al preu voluntari per al petit consumidor en el primer trimestre de 2014; el Reial decret 18/2014, de 17 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE); i el Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit

³⁴BOE núm. 270, d'11 de novembre de 2013.

³⁵BOE núm. 28, d'1 de febrer de 2014.

³⁶BOE núm. 28, d'1 de febrer de 2014.

consumidor d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació³⁷. Quant a la naturalesa, el Reial decret 1015/2013, de 20 de desembre, pel qual es modifiquen els annexos I, II i V de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat; l'Ordre AAA/2230/2013, de 25 de novembre, per la qual es regula el procediment de comunicació entre les administracions autonòmiques, estatal i comunitària de la informació oficial dels espais protegits Xarxa Natura 2000; i l'Ordre AAA/2231/2013, de 25 de novembre, per la qual es regula el procediment de comunicació a la Comissió Europea de les mesures compensatòries pel que fa a la conservació de Xarxa Natura 2000 adoptades en relació amb plans, programes i projectes, i de consulta prèvia a la seva adopció, previstes en la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat³⁸. Pel que fa a les aigües, l'Ordre DEF/2150/2013, d'11 de novembre, per la qual es desplega, en l'àmbit del Ministeri de Defensa, l'aplicació del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Quant als vegetals, el Reial decret 148/2014, de 7 de març, pel qual es modifica el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, i també per a l'exportació i trànsit cap a països tercers, i el Reial decret 1190/1998, de 12 de juny, pel qual es regulen els programes nacionals d'eradicació o control d'organismes nocius dels vegetals encara no establerts en el territori nacional. Pel que fa als vehicles, el Reial decret 35/2014, de 24 de gener, pel qual es regula la concessió directa de subvencions del "Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE.5)". I, sobre protecció civil, el Reial decret 893/2013, de 15 de novembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil d'emergència per incendis forestals.

³⁷ En aquest àmbit, cal tenir en compte també la Resolució de 21 de gener de 2014, de la presidència del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 17/2013, de 27 de desembre, pel qual es determina el preu de l'energia elèctrica en els contractes subjectes al preu voluntari per al petit consumidor en el primer trimestre de 2014.

³⁸ Pel que fa a la protecció de la naturalesa cal tenir en compte també la Resolució de 20 de novembre de 2013, de parcs nacionals, per la qual es publica l'aprovació per la UNESCO de tres reserves de la biosfera espanyoles: Las Mariñas Coruñesas (Galícia), les Terres de l'Ebre (Catalunya) i Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar (Castella i Lleó), i l'ampliació de la reserva de la biosfera Ordesa-Viñamala (Aragó); i la Resolució de 21 de gener de 2014, de parcs nacionals, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 de gener de 2014 pel qual s'amplien els límits del parc nacional de Las Tablas de Daimiel per la incorporació de terrenys limítrofs.

1.9. El Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020

una de les obligacions establertes per la directiva marc de residus i les previsions establertes per la Llei de residus i sòls contaminats.

L'objectiu últim d'aquest Programa és la reducció dels residus generats el 2020 en un 10% respecte del pes dels residus generats el 2010. Amb aquesta finalitat, s'articula al voltant de quatre línies estratègiques destinades a incidir en els elements clau de la prevenció de residus: reducció de la quantitat de residus; reutilització i allargament de la vida útil dels productes; reducció del contingut de substàncies nocives en materials i productes; i reducció dels impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient, dels residus generats. En cada línia estratègica s'identifiquen els productes o sectors d'activitat en què s'ha d'actuar prioritàriament, proposant les mesures de prevenció més efectives. La posada en pràctica d'aquestes mesures depèn de múltiples accions en diferents àmbits en què estan implicats els fabricants, el sector de la distribució i el sector serveis, els consumidors i usuaris finals i les administracions públiques. El Programa també preveu l'avaluació biennal dels avenços aconseguits pel que fa a prevenció.

2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques

A diferència del que havia succeït en cròniques anteriors, en les quals advertíem de l'escassa activitat normativa de Catalunya pel que fa a protecció del medi ambient i de la pèrdua de protagonisme d'aquesta matèria, en el període analitzat s'han escomès importants reformes legislatives pel que fa al medi ambient. Tot i que no s'ha aprovat cap norma amb rang de llei específicament pel que fa al medi ambient, paradoxalment s'ha modificat un bon nombre de lleis ambientals. La tècnica legislativa emprada ha estat, com ja havia succeït el 2011 i 2012, la utilització de la Llei d'acompanyament als pressupostos per modificar, entre altres, algunes de les principals lleis ambientals catalanes. De nou, s'utilitza la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives per introduir algunes reformes importants pel que fa al medi ambient. En efecte, per mitjà de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, s'han modificat, entre altres lleis ambientals, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals; la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de

l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn; el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus; el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la legislació pel que fa a les aigües de Catalunya, i la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. Així mateix, la Llei 2/2014 també ha introduït una modificació interessant en el Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, ja que suposa la prohibició, de forma indirecta, del *fracking* a Catalunya.

En aquest període, tot i que encara no s'ha escomès la necessària reforma de la legislació catalana a aquests efectes, també s'han fet els primers passos per aplicar a Catalunya la directiva d'emissions industrials i la seva transposició estatal, que afecta les activitats incloses en l'annex I.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental. D'aquesta manera, per complir aquesta normativa, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha adoptat un procediment simplificat i a curt termini de revisió anticipada d'unes 1.300 autoritzacions ambientals vigents. Així mateix, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha aprovat el primer Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, i el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada, aprovat anualment.

Quant als projectes de llei en tràmit, en aquest període ha iniciat la tramitació el Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que genera l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera; i continua el seu curs la tramitació del Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes pel que fa a tributació, comerç i joc, a fi de possibilitar la instal·lació a Catalunya del macroprojecte de casinos, hotels i botigues Barcelona World; de fet, està a punt d'emetre's en aquests moments el Dictamen del *Consell de Garanties Estatutàries* sobre el projecte de llei, a petició d'ICV-EUiA i la CUP, contraris al projecte.

Des del punt de vista de les iniciatives i actuacions d'interès polític, resulten d'interès l'aprovació pel Govern de l'Estratègia per promoure l'activació de la gestió forestal sostenible a través de l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola i de l'Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d'Edificis.

D'altra banda, en l'àmbit de la planificació, s'han aprovat alguns plans d'acció sobre contaminació acústica per a algunes aglomeracions d'àmbit supramunicipal. Així mateix, continua la tramitació el nou Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire, sotmès a informació pública, amb l'informe de sostenibilitat ambiental del Pla, en data 11 de novembre de 2013, a fi de recollir accions concretes per dur a terme en els quaranta municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona declarats com a zona de protecció especial per reduir les emissions de contaminants i millorar la qualitat de l'aire i rebaixar els nivells d'òxid de nitrogen i partícules de diàmetre inferior a 10 microns (PM10) en l'ambient atmosfèric fins als límits establerts per la normativa europea. Pel que fa als residus, l'Agència de Residus de Catalunya està elaborant el nou Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), que fusiona en un sol document la gestió dels residus municipals, industrials i de la construcció; i també està treballant en el nou pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20), que ha de marcar les noves bases del model de gestió i distribució territorial, i assegurar que la xarxa d'infraestructures funcioni amb eficàcia i amb capacitat per definir les necessitats futures. Per la seva banda, l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat els processos de participació vinculats amb la revisió del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu programa de mesures. Finalment, la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya també ha aprovat inicialment, a finals de 2013, la modificació dels plans directors urbanístics del sistema costaner.

2.1. La Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 i el seu impacte sobre el cànon de l'aigua

La Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2014 inclou en el títol V algunes normes tributàries que afecten el cànon de l'aigua. Concretament, determina els valors de base per volum per a usos domèstics i industrials i assimilables i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació del cànon de l'aigua, a l'efecte de determinar el tipus de gravamen específic d'una manera individualitzada durant l'any 2014; els valors per determinar la quota del cànon de l'aigua corresponent als establiments ramaders; i els valors per a la determinació

objectiva de la quota corresponent a usos industrials d'aigua per a la producció d'energia elèctrica, efectuats per centrals hidroelèctriques.

2.2. L'impacte de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic sobre la legislació ambiental: modificacions legislatives relatives a l'ordenació ambiental i d'aigües i d'agricultura, pesca, alimentació i medi natural

A través de la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat (la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic), s'han modificat diverses lleis ambientals. De nou, com ja s'havia fet en anys anteriors, s'empren la modificació en una única llei de moltes altres pel que fa a medi ambient o en àmbits connexos. Aquestes modificacions coincideixen, a més, amb les de moltes altres lleis en els àmbits fiscal, financer, del sector públic..., sense relació aparent amb les primeres, tot això sota el mateix paraigua i tramitant-se en el mateix procediment legislatiu. La tècnica legislativa que s'ha seguit és objecte de crítica, tenint en compte que es regulen en un text únic les modificacions de diverses normes amb rang de llei, sobre matèries molt diverses, sense fil conductor entre si. Assistim, d'aquesta manera, a un procés caòtic de reformes legislatives, utilitzant una llei d'acompanyament, presentada amb la llei de pressupostos, per modificar un ampli nombre de normes amb rang llei que afecten un conglomerat de matèries i normes diverses sense connexió entre si.

títol VI, realitza diverses modificacions legislatives sobre habitatge i urbanisme, d'ordenació ambiental, d'ordenació d'aigües i d'ordenació territorial. En els apartats següents comuniquem les principals modificacions pel que fa a medi ambient.

A. La modificació de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals

La Llei 2/2014 modifica l'apartat 2 de l'article 16 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Amb aquesta modificació, als dos instruments ja previstos per a la delimitació definitiva dels límits de cadascun dels espais inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural (la declaració d'alguna de les figures de protecció especial —parcs nacionals, paratges nacionals d'interès nacional, reserves naturals i parcs naturals— i el planejament especial a què fa referència l'article 5 d'aquesta llei) s'hi uneix el tercer: la

resolució de la persona titular del departament competent en el disseny del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya.

B. La modificació de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn

La Llei 2/2014 també introdueix algunes modificacions en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Les modificacions més importants són tres. En primer lloc, a les mesures de protecció del medi nocturn s'hi incorporen noves tecnologies d'il·luminació, com els díodes emissors de llum i altres llums d'halurs ceràmics, ja que s'ha previst que en els processos de renovació de l'enllumenat públic han de substituir-se els llums de vapor de mercuri d'alta pressió (VM) per altres de menor emissió de radiació de longitud d'ona curta i més eficàcia lluminosa, que han de tendir a reduir la potència instal·lada.

En segon lloc, es modifica el règim sancionador. En particular, es modifica la tipificació de les infraccions administratives, que poden ser lleus, greus o molt greus (art. 16); i també les sancions administratives (art. 19), i s'incrementa la quantia de les sancions que poden imposar-se, que ara són multa de 200 a 800 euros, en cas de sanció d'infraccions lleus, de 801 a 4.000 euros en cas de sanció d'infraccions greus, i de 4.001 a 40.000 euros en cas de sanció d'infraccions molt greus.

En tercer lloc, es modifica l'apartat 1 de la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001, que ara estableix que l'enllumenat exterior existent ha de complir les prescripcions d'aquesta llei en les condicions que estableixi el reglament que l'ha de desplegar³⁹.

C. La modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

³⁹ Per a la correcta interpretació d'aquesta disposició transitòria, vegeu la nota informativa sobre la realització dels controls ambientals de contaminació lluminosa de les activitats subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, de 30 de gener de 2014 (accessible en l'enllaç següent: <http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Atmosfera/Contaminacio%20lluminosa/doc/Nota%20controls%20ambientals%20activitats.pdf> > —últim accés, el 31 de març de 2014).

La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats ha tornat a modificar-se a través de la Llei d'acompanyament dels pressupostos. Amb aquesta, ja són quatre les modificacions que ha experimentat la Llei 20/2009, a pesar de ser una llei relativament recent, sense oblidar que en un futur pròxim haurà de ser objecte d'una altra modificació per adaptar-se a la Directiva 2010/75/UE, d'emissions industrials i a la legislació bàsica estatal que ha incorporat aquesta Directiva (la Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats; i el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002).

Són molts els preceptes de la Llei 20/2009 que són objecte de modificació, per la qual cosa únicament destacarem algunes de les modificacions més importants. En primer lloc, a través de la modificació de l'article 33, s'especifiquen els casos en què la persona o l'empresa titulars de les activitats que estan classificades en els annexos II i III han de formular una consulta prèvia a l'Administració respecte al sotmetiment a l'avaluació d'impacte ambiental, en aplicació dels criteris establerts en l'annex V. Són els supòsits següents: quan aquestes activitats afecten directament espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural; en els espais naturals de protecció especial declarats d'acord amb la Llei 12/1985; en les zones humides i les àrees designades en aplicació de la Directiva 2009/147/CE i la Directiva 92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits que es determinen legalment; i, en el cas de les activitats de l'annex II, quan es determini específicament en l'epígraf corresponent d'aquest annex.

En segon lloc, es modifica el règim d'intervenció ambiental en espectacles públics i activitats recreatives i altres activitats de competència municipal sectorial, recollit en l'article 56 de la Llei 20/2009. Per a aquestes activitats, després d'aquesta modificació, ja no serà possible exigir, en cap cas, comunicació ambiental o llicència ambiental. La intervenció ambiental en totes les activitats d'espectacles públics i activitats recreatives s'integra ara en el procediment d'atorgament de la llicència municipal o l'autorització sectorial mitjançant un informe ambiental de l'òrgan tècnic municipal o comarcal, que contindrà les determinacions establertes per la normativa en aquesta matèria, o, si escau,

en les condicions establertes per al règim de comunicació⁴⁰. En coherència amb aquesta modificació, també es deroga el codi 12.59 de l'annex III i l'annex IV de la Llei 20/2009.

En tercer lloc, es modifiquen els articles 59 i 67, que afecten, respectivament, la intervenció administrativa en les modificacions de les activitats i a les especificitats de les explotacions ramaderes i d'altres tipus d'instal·lacions.

En quart lloc, també s'estableixen algunes modificacions que afecten el règim de control (inicial i periòdic) de les activitats. En particular, destaquem la supressió del règim de control ambiental per a les activitats sotmeses al règim de declaració d'impacte ambiental i autorització substantiva de l'annex I.3 i per a les activitats anteriorment recollides en l'annex IV, ja que aquest annex queda derogat, com hem comentat anteriorment.

Finalment, també destaquem la modificació que afecta les multes coercitives (passen d'una quantia màxima de 3.000 euros a 15.000 euros) i la que afecta l'apartat 3 de la disposició transitòria quarta de la Llei 20/2009 (en la nova redacció preveu que les activitats classificades en l'annex III que a l'entrada en vigor d'aquesta llei disposin de llicència d'activitats, quedin exemptes d'haver comunicació ambiental, i és el règim de controls d'aquestes activitats el corresponent a les activitats de l'annex III, que ha d'establir-se per reglament).

D. La modificació de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, en relació amb la prevenció i control ambiental de les activitats ramaderes

La Llei 2/2014 també modifica la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. En particular, destaquem la modificació que afecta el règim aplicable als controls periòdics de les activitats ramaderes que disposen d'autorització ambiental en la data d'entrada en vigor de la Llei 9/2011 perquè en el moment oportú estaven en l'annex I i quedaven subjectes a autorització ambiental, però que actualment estan incloses en l'annex II i requeririen llicència ambiental. Si bé inicialment la Llei

⁴⁰ Amb anterioritat a aquesta reforma, quedaven subjectes a comunicació ambiental les activitats d'espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta matèria, en els termes que s'estableixi per reglament (codi 12.59 de l'annex III de la Llei 20/2009); i a llicència ambiental les activitats específicament determinades en l'annex IV que en la normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives no estaven subjectes al règim de llicència.

9/2011 va establir que aquestes activitats, a pesar d'haver canviat d'annex, mantenen el règim de control establert per l'autorització atorgada, ara es canvia el criteri i es disposa que passin a regir-se pel règim de control establert per a les activitats de l'annex II.

E. La modificació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de residus

El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de residus, també és modificat per la Llei 2/2014. Les modificacions afecten els articles 8 (Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals), 19 (espais degradats i sòls contaminats), 24.4 i 74, 75, 76, 86, 87 i 120 (pel que fa a sancions, relatius respectivament a infraccions molt greus, greus i lleus; criteris objectius i subjectius; i prescripció d'infraccions).

Així mateix, s'afegeix l'article 21 ter en relació amb la recuperació voluntària de sòls i un nou apartat 5 en l'article 26, que afecta la gestió d'olis industrials usats. En relació amb el primer d'aquests preceptes afegits, preveu que la descontaminació del sòl pugui dur-se a terme sense la prèvia declaració del sòl com a contaminat, mitjançant la presentació davant de l'Agència de Residus de Catalunya d'un projecte de recuperació voluntària. Aquest projecte ha de ser aprovat per l'òrgan competent, ha de considerar tot l'abast de l'afecció i ha d'acompanyar-se de la valoració de riscos que acredita l'existència d'un risc inacceptable. Respecte als olis industrials usats, generats a Catalunya, han de tractar-se, exclusivament, per la via de la seva regeneració, amb l'ús de les millors tècniques disponibles.

F. La modificació del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la legislació pel que fa a les aigües de Catalunya

En matèria d'Pel que fa a les aigües, la Llei 2/2014 introdueix diferents modificacions en el Text refós de la legislació pel que fa a l'aigua de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, a fi d'incorporar el principi de recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l'aigua, en adaptació de la directiva marc d'aigües, que estableix la necessitat que els estats membres tinguin en compte aquest principi. D'aquesta manera, amb relació a l'àmbit econòmic financer i a l'exigència dels tributs que els corresponguin d'acord amb la normativa vigent, les administracions titulars dels

serveis d'abastiment i sanejament han de tenir present el principi de recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l'aigua. També es configura com a objectiu de la planificació hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya garantir aquest principi, mitjançant l'establiment d'un sistema de tarifació que ofereixi incentius per assolir l'ús eficient de l'aigua i l'èxit dels objectius establerts pel Govern. A aquests efectes, l'Administració competent pel que fa al subministrament d'aigua i del tractament d'aigües residuals ha d'establir les estructures tarifàries necessàries per recuperar costos, garantir el respecte de les necessitats bàsiques i desincentivar consums excessius. Aquestes tarifes han de respondre als criteris de repercussió dels costos en els preus, que estableix la Generalitat, sense perjudici de les compensacions que, en els casos de prestació dels serveis en règim de concessió administrativa, pugui establir l'Administració titular del servei de subministrament d'aigua per establir l'equilibri econòmic del servei.

G. La modificació de la legislació en l'àmbit forestal

En l'àmbit forestal, la Llei 2/2014 introdueix algunes modificacions. En primer lloc, modifica la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, a fi de simplificar els processos de tramitació de les activitats regulades per aquesta llei, especialment els aprofitaments dels recursos forestals.

En segon lloc, es modifiquen la Llei 7/1999, de 30 de juliol del Centre de la Propietat Forestal, i la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que n'amplia l'àmbit d'aplicació i passa a incloure urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

H. La nova regulació de la producció agroalimentària ecològica i de la producció integrada

La Llei 2/2014 regula novament els àmbits de la producció agroalimentària ecològica i de la producció integrada agrària. D'una banda, es regula àmpliament la producció agroalimentària ecològica, definida com un sistema general de gestió agrícola i producció d'aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l'aplicació de normes exigents sobre

benestar animal i la producció d'acord amb les preferències de determinats consumidors per a productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals. En particular, es regula el règim de control de la producció agroalimentària ecològica; es designa l'autoritat competent responsable pel que fa a la producció agroalimentària ecològica (el departament competent en aquesta matèria); es regula àmpliament el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que és una corporació de dret públic, configurada com a autoritat de control per aplicar el règim de control establert pel Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 1997, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, a Catalunya; s'inclouen algunes previsions sobre la protecció dels termes referits a la producció agroalimentària ecològica, els mecanismes de control de l'actuació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i el finançament d'aquest organisme; i es regula el règim sancionador pel que fa a la producció agroalimentària ecològica.

D'una altra banda, també s'introdueix una nova regulació de la producció integrada, definida com el sistema agrari de producció i obtenció d'aliments de qualitat, frescos o transformats, i altres productes, que prioritza la utilització de recursos i mecanismes de regulació naturals, amb l'objectiu d'optimitzar els mètodes de producció, evitar les aportacions perjudicials al medi ambient i assegurar a llarg termini una agricultura i una ramaderia sostenibles. En particular, es determina la naturalesa (corporació de dret públic) i el règim de funcionament del Consell Català de la Producció Integrada, les finalitats del qual són la representació, defensa, garantia i promoció de la producció integrada; es regulen la protecció dels termes referits a la producció integrada, els mecanismes de control de l'actuació del Consell Català de la Producció Integrada, el control i la certificació dels productes de producció integrada i el finançament del Consell Català de la Producció Integrada; i estableix el règim sancionador pel que fa a la producció integrada.

Finalment, també es modifica la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, a fi d'introduir alguna modificació en les infraccions administratives.

I. La modificació de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes i la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals

En matèria de Pesca que fa a la pesca, la Llei 2/2014 ha modificat la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, per determinar els òrgans competents per incoar i imposar sancions en els expedients sancionadors i introduir algunes modificacions que afecten les infraccions i sancions administratives; i la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, per establir noves infraccions administratives en aquest àmbit i modificar-ne algunes de les previstes.

2.3. L'impacte de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic sobre la legislació urbanística: la prohibició indirecta del fracking

La Llei 2/2014 també ha modificat diferents preceptes del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. D'aquestes modificacions destaquem, sens dubte, la de l'article 47, ja que suposa la prohibició del *fracking* a Catalunya. S'hi afegeix un apartat, el 10, a l'article 47, en el qual s'estableix que en l'explotació de recursos naturals en sòl no urbanitzable, en el cas d'aprofitaments d'hidrocarburs, no està permès utilitzar la tecnologia de la fractura hidràulica si pot tenir efectes negatius sobre les característiques geològiques, ambientals, paisatgístiques o socioeconòmiques de la zona, o amb relació a altres àmbits competencials de la Generalitat. A la pràctica, això implica que no podran atorgar-se els permisos urbanístics per construir i posar en marxa en territori català instal·lacions amb l'objecte d'utilitzar aquesta tècnica d'extracció d'hidrocarburs. D'aquesta manera, Catalunya s'uneix a altres comunitats autònomes com Cantàbria, La Rioja i Navarra, que ja han prohibit el *fracking*, encara que en el cas de Catalunya no es fa a través d'una llei específica que prohibeix de forma directa l'ús d'aquesta tècnica, sinó de forma indirecta, a través de la modificació de la legislació urbanística que porta a un resultat semblant.

2.4. Altres normes d'interès

A més de les ressenyades, en el període objecte d'anàlisi s'han aprovat altres normes d'interès des de la perspectiva ambiental. Destaquem, en primer lloc, en l'àmbit organitzatiu, l'aprovació del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que en

simplifica l'estructura, amb l'objecte de millorar l'eficiència i l'eficàcia de les actuacions administratives, i la fa extensiva als serveis territorials.

En segon lloc, l'aprovació del Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes, l'objecte del qual és establir els requisits que han de complir aquestes explotacions; establir el règim d'autorització o comunicació de l'inici de l'activitat ramadera i inscripció en el registre; regular el registre d'explotacions ramaderes; regular el Directori d'operadors en el sector de la ramaderia; i determinar el règim d'inspecció i sancionador en l'àmbit de les explotacions ramaderes. L'àmbit d'aplicació s'estén a les explotacions ramaderes d'animals de producció que es detallen en l'annex I que es criïn o es mantinguin amb finalitat productiva, i també a les instal·lacions de recollida, emmagatzematge i distribució de material genètic d'animals de producció, operadors comercials amb instal·lacions o sense, instal·lacions de concentració d'animals, pastures, instal·lacions per a la pràctica eqüestre, instal·lacions d'èquids d'oci i a empreses integradores. En tot cas, ha de tractar-se d'explotacions ramaderes ubicades en l'àmbit territorial de Catalunya.

En tercer lloc, cal esmentar el Decret 6/2014, de 14 de gener, pel qual s'ha creat la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, com a òrgan rector d'aquest parc natural, amb la composició, les funcions i el règim jurídic previst en aquest decret; i l'Ordre TES/341/2013, de 16 de desembre, per la qual es crea i s'organitza el Registre de Seguretat de Preses i Embassaments de Catalunya.

Pel que fa a la protecció de la naturalesa, també cal destacar l'Acord GOV/166/2013, de 3 de desembre, mitjançant el qual es declaren zones especials de conservació (ZEC) de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la Xarxa Natura 2000, set llocs d'importància comunitària situats a la Plana de Lleida. L'instrument de gestió aplicable a aquestes zones és el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida i el Pla de Gestió d'aquests espais, aprovats mitjançant l'Acord GOV/185/2010, d'11 d'octubre. I l'Acord GOV/176/2013, de 17 de desembre, mitjançant el qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la Xarxa Natura 2000 i se n'aprova l'instrument de gestió.

2.5. L'aplicació de la directiva d'emissions industrials a Catalunya

L'aplicació de la Directiva 2010/75/UE del Parlament europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials, i de la normativa de transposició de l'Estat (Llei 5/2013, d'11 de juny, i Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre) a Catalunya ha estat un dels eixos sobre els quals ha gravitat l'actuació del Departament de Territori i Sostenibilitat aquests últims mesos. D'una banda, per complir amb aquesta normativa, s'han revisat unes 1.300 autoritzacions ambientals vigents. I d'una altra, s'ha aprovat el primer Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, i el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada, aprovat anualment.

A. La revisió de les autoritzacions ambientals vigents

La Llei 16/2002, d'1 de juliol, després de la seva modificació per la Llei 5/2013 inclou, en la disposició transitòria primera, un procediment d'actualització de les autoritzacions ja atorgades, en virtut del qual, l'òrgan ambiental competent, d'ofici, ha de comprovar, mitjançant un procediment simplificat, l'adequació de l'autorització a les prescripcions de la nova directiva d'emissions industrials. S'estableix com a data límit per a l'actualització de les autoritzacions el 7 de gener de 2014.

Per complir aquesta obligació d'adequació de les autoritzacions ambientals existents als nous requeriments ambientals imposats per la directiva d'emissions industrials, el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, ha adoptat un procediment simplificat i a curt termini de revisió anticipada de 1.300 autoritzacions ambientals vigents a Catalunya, emmarcat en els acords del Govern sobre simplificació administrativa. L'adaptació al procés d'aplicació d'aquesta directiva a Catalunya s'ha fet en línia amb la voluntat del Govern de reduir i minimitzar les càrregues administratives. D'aquesta manera, s'han agilitzat i simplificat els tràmits per facilitar l'exercici de les activitats econòmiques i no afegir noves càrregues, adoptant un procediment que comporta el mínim impacte econòmic i administratiu per al teixit productiu.

B. L'aprovació del Pla i del Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya

La directiva d'emissions industrials i la normativa espanyola de transposició introdueixen una regulació nova del règim d'inspecció de les instal·lacions, que es tradueix principalment en l'obligació d'establir un sistema d'inspecció mediambiental

de les instal·lacions i de formular plans d'inspecció a partir dels quals s'han d'elaborar programes d'inspecció mediambiental prefixada, que incloguin la freqüència de les visites als emplaçaments per als diferents tipus d'instal·lacions. Per complir aquestes exigències, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha aprovat el primer Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, amb l'objectiu general de comprovar el grau de compliment de la normativa ambiental i els requisits establerts en les autoritzacions ambientals integrades dels establiments que duguin a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny. Així mateix, ha aprovat el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada, que constitueix l'element principal per executar les actuacions d'inspecció ambiental integrada, a més de permetre el seguiment i la vigilància dels establiments. A partir d'un procés d'avaluació de risc dels establiments, se seleccionen els que seran objecte d'una actuació d'inspecció ambiental integrada al llarg de l'any. Els establiments que estiguin inclosos en el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada Anual seran informats individualment des de la unitat gestora (Servei Territorial corresponent o Servei de Seguiment i Informació d'Activitats de la Direcció General de Qualitat Ambiental) i se'ls requerirà perquè una entitat col·laboradora realitzi, en nom de l'Administració, l'acció material d'inspecció ambiental abans de la data límit establerta en el mateix requeriment. Finalitzada la inspecció ambiental, en el termini màxim de quatre mesos, es publicarà l'informe que conclou sobre el grau de compliment de l'establiment.

2.6. Algunes actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció del medi ambient

A. L'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

Mitjançant l'Acord GOV/22/2014, de 18 de febrer, el Govern ha aprovat l'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, que s'incorpora com a annex. Aquesta estratègia s'inscriu en els objectius del nou Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024, i també en els de l'Estratègia 2020 de la Unió Europea i del Pla de l'Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), aprovat pel Govern en la sessió de 9 d'octubre de 2012 i que fa una aposta decidida per l'aprofitament energètic de la biomassa forestal, proposant una estratègia singular específica en aquest àmbit.

Amb aquesta estratègia, aprovada per promoure l'activació de la gestió forestal sostenible a Catalunya a través de l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola de Catalunya, es pretén millorar l'estat dels boscos i la seva biodiversitat, reduir el risc d'incendis i els efectes del canvi climàtic, i contribuir a la recuperació econòmica a través de l'activació del sector forestal i la dinamització de les zones rurals. Els objectius essencials són l'aprofitament energètic de la biomassa forestal activant la cadena forestal per millorar l'estat dels boscos de Catalunya, reduir la càrrega de combustible que s'acumula, reduir el risc d'incendis i potenciar la resiliència de les masses forestals, la qual cosa afavoreix la millora de la biodiversitat i la reducció dels efectes negatius del canvi climàtic i dels riscos naturals.

B. L'Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis

Amb data 25 de febrer de 2014, el Govern ha aprovat l'Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis, en el marc del projecte MARIE ("Repensant els edificis mediterranis per millorar-ne l'eficiència energètica") del programa europeu MED, liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta estratègia neix amb els objectius següents: reactivar el sector de la construcció; conscienciar la ciutadania dels beneficis de la renovació energètica; reduir el 14,4 % del consum estimat d'energia final del parc edificat residencial i terciari; disminuir el 22 % de les emissions de CO₂; assolir l'estalvi d'un 21% de l'estalvi econòmic del parc edificat, equivalent a 800 milions d'euros; i la voluntat d'intervenir en el 61% dels immobles de Catalunya. A aquests efectes, inclou un pla d'acció dividit en cinc eixos centrals (sistema d'informació amb les dades del parc edificat català; plataforma de trobada; catàleg de productes i serveis; organització i simplificació normativa, i programa d'inversions i mecanismes financers), que integrarà el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica en els edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014, amb un full de ruta amb l'horitzó 2020.

També es creen el Comitè Executiu per a la implementació de l'Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis, com a òrgan col·legiat adscrit al departament competent pel que fa a habitatge; i la Comissió Interdepartamental de Renovació Energètica d'Edificis a Catalunya, com a òrgan col·legiat adscrit al departament competent pel que fa a energia.

C. L'establiment d'una moratòria per a determinades infraestructures de gestió de residus

L'Acord GOV/158/2013, de 12 de novembre, ha establert una nova moratòria en l'admissió a tràmit de sol·licituds corresponents a infraestructures de gestió de residus relatives a dipòsits controlats de classe II, des del 26 d'octubre de 2013 fins a l'aprovació del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals o, en tot cas, per un termini màxim de dos anys, a comptar del 26 d'octubre de 2013.

D. L'aprovació d'alguns plans d'acció pel que fa a contaminació acústica

A finals de 2013, la directora general de Qualitat Ambiental ha aprovat definitivament dos plans d'acció pel que fa a contaminació acústica: el de l'aglomeració d'àmbit supramunicipal Baix Llobregat I, constituïda pels municipis d'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern (Resolució TES/2673/2013, de 25 de novembre); i el de l'aglomeració d'àmbit supramunicipal Barcelonès II, constituïda pels municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet (Resolució TES/2677/2013, de 25 de novembre).